

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/CTE/M/18

10 de agosto de 1998

(98-3138)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

Original: inglés

INFORME SOBRE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO DE 1998

Nota de la Secretaría

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió los días 23 y 24 de julio de 1998 bajo la presidencia del Embajador C.M. See, de Singapur. Se adoptó el orden del día propuesto en el documento WTO/AIR/839.

2. Se acordó que el Presidente celebraría consultas informales abiertas a fin de preparar el informe del Comité de Comercio y Medio Ambiente de 1998 para su aprobación en la reunión prevista para los días 26 a 28 de octubre.

Vinculaciones entre el programa multilateral del medio ambiente y el del comercio

Sesión de información respecto de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA)

3. El observador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) formuló una declaración, que se distribuyó bajo la signatura WT/CTE/W/94, sobre los criterios y principios ambientales básicos que subyacen en el desarrollo de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) y la relación entre dichos Acuerdos y la OMC.

4. Para mejorar la comprensión del CCMA sobre las vinculaciones entre el programa multilateral del medio ambiente y el del comercio, se invitó a participar a las secretarías de varios AMUMA.

5. Los representantes de las siguientes secretarías formularon sus exposiciones y prepararon documentos de antecedentes como aportación a los debates: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (WT/CTE/W/74); el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos del PNUMA respecto del Convenio sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional y las negociaciones para un tratado mundial sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (WT/CTE/W/91); la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas respecto al Protocolo de la Comisión sobre los contaminantes orgánicos persistentes (WT/CTE/W/88); el Convenio de Basilea sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (WT/CTE/W/90); el Convenio sobre la Diversidad Biológica (WT/CTE/W/92); la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (WT/CTE/W/89); el Foro Intergubernamental sobre los Bosques (WT/CTE/W/84); y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (WT/CTE/W/87).

6. Los Miembros acogieron con satisfacción las contribuciones del PNUMA y de las secretarías de los AMUMA y formularon observaciones sobre los aspectos de los acuerdos relacionados con el comercio, presentados en sus exposiciones y documentos informativos.

Puntos primero y quinto: La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente; y la relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

7. El representante del Canadá agradeció al PNUMA la declaración formulada en la sesión de información respecto de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente, que resultaba muy útil para la labor del CCMA en el sentido de que facilitaba información a los negociadores comerciales sobre los elementos comunes a dichos Acuerdos. Los documentos de las secretarías de los AMUMA habían contribuido también a la comprensión del modo en que se habían aplicado los criterios y principios ambientales básicos para abordar los problemas ambientales particulares, y habían acentuado la necesidad de una coordinación de la política nacional en las negociaciones comerciales y ambientales. La opinión del Canadá sobre el punto primero se basaba en el marco general esbozado en junio de 1996, que recomendaba que la OMC elaborara una propuesta de "principios y criterios" para los AMUMA a fin de guiar a los negociadores internacionales en la consideración de la utilización de medidas comerciales en dichos Acuerdos. El Canadá había propuesto los siguientes principios calificadores para los AMUMA: i) que los acuerdos estuvieran abiertos a todos los países; ii) que reflejaran un amplio apoyo internacional; iii) que las disposiciones que autorizaran específicamente medidas comerciales se redactaran de la manera más precisa posible; iv) que se permitiera el comercio con países que no fueran partes en el AMUMA sobre la misma base que con las partes siempre que aquéllos prestaran una protección ambiental equivalente a la requerida por el AMUMA; y v) que los negociadores consideraran explícitamente los criterios elaborados por la OMC para la aplicación de las medidas de los AMUMA. El Canadá había sugerido también que los negociadores de los AMUMA aplicaran los siguientes criterios en la determinación de la necesidad de disposiciones comerciales: i) sólo se adoptarían medidas comerciales si eran eficaces y se consideraba que otras medidas eran ineficaces para alcanzar los objetivos ambientales, o habían demostrado su ineficacia si no iban acompañadas de medidas comerciales; ii) las medidas comerciales no debían restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo ambiental perseguido; y iii) las medidas comerciales adoptadas no debían suponer una discriminación arbitraria o injustificable.

8. Desde la elaboración de estos principios y directrices en 1996, el Canadá los había utilizado internamente para el desarrollo de sus posiciones negociadoras en los nuevos AMUMA. Le habían ayudado a estructurar sus debates interdepartamentales y a desarrollar una política bastante coherente sobre la utilización de tales medidas comerciales, teniendo presente que cada acuerdo multilateral o regional sobre el medio ambiente tenía una dinámica de negociación diferente. Como el Canadá seguía adquiriendo experiencia en su aplicación, estaría mejor capacitado para calibrar hasta qué punto esos principios y criterios ayudarían a evitar eventuales conflictos entre los AMUMA y las normas de la OMC. Para considerar la cuestión de la "articulación" de las medidas comerciales de los AMUMA dentro de la OMC, el CCMA debía tener presente el principio básico de buena fe del derecho internacional; a saber, que un Estado no debía en general participar en un acuerdo internacional que fuera claramente incompatible con sus obligaciones actuales. Según la experiencia del Canadá, la aplicación de la buena fe era en gran medida un asunto de coordinación de la política nacional entre los ministerios u organismos participantes. Mediante reuniones de funcionarios, la formulación de observaciones sobre los proyectos y las consultas con las partes interesadas, la coordinación de la política podía evitar en gran parte las posibles incompatibilidades o conflictos. La sesión de información sobre los AMUMA había destacado la necesidad de que los funcionarios que se ocupaban de las cuestiones del comercio tomaran parte en la negociación de esos acuerdos, lo mismo que el CCMA y otros órganos de la OMC, contando con la participación de funcionarios especializados en temas ambientales. La labor del CCMA había contribuido de manera significativa a mejorar la coordinación a nivel nacional.

9. Después de la reunión de Singapur, el Comité de Comercio y Medio Ambiente había reflexionado más profundamente acerca de los medios reales para conseguir una articulación formal de las medidas comerciales de los AMUMA que integrara un enfoque de principios y criterios. La variedad de propuestas presentadas, resumidas en una matriz, había resultado útil para estas reflexiones. La cuestión práctica sobre el modo de articular dichas medidas sin enjuiciamiento, mediante la aplicación de algunos principios y criterios, se planteaba en todas las hipótesis posibles. Este aspecto de "enjuiciamiento" no era aceptable desde una perspectiva de política ambiental, dada la jerarquía implícita de los sistemas legales internacionales. Desde una perspectiva de política comercial, estaba claro que los Miembros de la OMC no renunciarían formalmente a sus derechos en nombre de tales obligaciones sin alguna forma de "enjuiciamiento". La gama de opciones oscilaba desde la renuncia, o el juzgamiento explícito de los AMUMA por la OMC, hasta la modificación o interpretación formal del artículo XX, al margen de criterios, que equivalía a una renuncia formal de derechos adquiridos en la OMC. Cualquier negociación con respecto al artículo XX creaba el riesgo de resultar más restrictiva que el *statu quo*, que otorgaba una gran flexibilidad según lo manifestado en el informe del CCMA de 1996. Este *statu quo* continuaba desarrollándose a través de los grupos especiales de la OMC. El problema desde el punto de vista del derecho comercial no era que éste se viera debilitado en cierto modo por los AMUMA, sino más bien que los intereses proteccionistas utilizaran los instrumentos de los AMUMA, en sí mismos legítimos, para obstaculizar el comercio desacreditando así tanto el derecho comercial como los AMUMA; en el caso de la OMC, por poner en tela de juicio medidas presentadas como de defensa ambiental, y en el caso de los AMUMA, por ser usados abusivamente.

10. El Canadá consideraba que era muy improbable que el CCMA, o la propia OMC, pudieran acordar cualquier articulación formal a medio plazo. No se trataba simplemente de una cuestión de voluntad política, sino de la dificultad de lograr un resultado equilibrado y convincente que fuese aceptable para todos. El Canadá preguntaba si no debía adoptarse un enfoque "suave" más práctico mediante la elaboración de una declaración sobre la interacción entre los AMUMA y la OMC. Semejante solución provisional debía permitir al Comité de Comercio y Medio Ambiente emitir un mensaje de política firme en un proceso de negociación relativamente corto y menos polarizado. Tal declaración debería basarse en el informe del CCMA de 1996, en la evolución reciente de la jurisprudencia de la OMC y en la mejora del conocimiento e interpretación de las vinculaciones entre las negociaciones comerciales y ambientales, engendrada por la fase de conocimiento y análisis del Comité de Comercio y Medio Ambiente posterior a la reunión de Singapur. Las reuniones de información sobre los AMUMA y la declaración del PNUMA habían resultado particularmente útiles a este respecto. Un enfoque semejante no excluiría necesariamente el trabajo para un enfoque más formal en una fase posterior, pero permitiría obtener antes resultados más equilibrados en plazos viables.

11. En lugar de emplear un tiempo excesivo en la polémica búsqueda de la articulación formal de los AMUMA, El Canadá preguntaba si no sería más acertado que el Comité de Comercio y Medio Ambiente, en sus propias reuniones o en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, dedicara más atención a las normas, el etiquetado y otros asuntos identificados por los Miembros en la Conferencia Ministerial de 1998 como sus preocupaciones inmediatas sobre comercio y medio ambiente. Evidentemente había un problema real pero incómodo en los procesos y métodos de producción no relacionados con productos, como se reconocía, explícita o implícitamente, en las declaraciones de la Conferencia Ministerial. Como había señalado el Canadá en la reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de 1º de julio, en el debate sobre etiquetado de organismos modificados genéticamente, era necesario abordar el problema del etiquetado referente al modo de producción y no sólo a las características finales del producto. Los comerciantes canadienses adoptaban cada vez más un enfoque pragmático a ese respecto. En esa línea estaban el *Ecoetiquetado y otros requisitos de calidad ambiental en los textiles y el vestido* del Centro Internacional de Comercio, las normas de Colombia respecto a las flores cortadas, las del Brasil respecto del cuero, y las del Brasil y el Canadá respecto de los productos forestales. Estos ejemplos concretos reflejaban un equilibrio pragmático y constructivo entre los objetivos comerciales y ambientales. El orador preguntó si la OMC podría

permitirse ignorar las realidades del mercado que habían creado la tecnología moderna y las preferencias de los consumidores.

12. Aunque el punto quinto estaba en gran parte incluido en el punto primero, era útil señalar algunos aspectos separadamente. El Comité de Comercio y Medio Ambiente necesitaba apreciar el distinto papel que la solución de diferencias desempeñaba en los AMUMA y en la OMC; este tema se había planteado en las exposiciones de los AMUMA. Aunque las disposiciones sobre solución de diferencias de los acuerdos comerciales se habían aplicado en numerosas ocasiones, no existía caso alguno en que se hubieran aplicado las disposiciones similares de los AMUMA, principalmente porque la solución de diferencias del tipo de la OMC no ofrecía el enfoque más adecuado para garantizar la aplicación de los AMUMA. Los países que negociaban un AMUMA no procuraban un mejor acceso al medio ambiente de los demás a cambio del acceso al suyo propio, sino que intentaban abordar un problema ambiental común mediante una actuación colectiva. La repercusión del incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes de un AMUMA se extendía frecuentemente entre todas las partes y era difícil de cuantificar, debilitando además el logro del objetivo ambiental común y las medidas colectivas acordadas para conseguirlo. En este sentido, parecería que las partes de los AMUMA hicieran más hincapié en el desarrollo de sistemas firmes y eficaces para asegurar el cumplimiento que en el tradicional sistema de solución de diferencias. Los sistemas de verificación del cumplimiento tendían a basarse en mecanismos de revisión por las partes asociadas que no daban lugar a enfrentamiento y en que las partes cooperaban en la busca de soluciones. En cambio, los mecanismos de solución de diferencias eran generalmente de confrontación, entre partes adversas, que se concentraban en la imposición de las obligaciones mediante el arbitraje de terceros.

13. Los negociadores de los AMUMA estaban llegando a reconocer que el objetivo de protección ambiental se lograba mejor mediante métodos de carácter cooperativo y facilitador en los sistemas de verificación del cumplimiento. A diferencia de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, buscaban principalmente facilitar un cumplimiento pleno y oportuno antes que imputar o distribuir responsabilidades, y perseguían ayudar a las partes a identificar el incumplimiento y ponerle remedio. Este enfoque de carácter facilitador animaba a los países a firmar dichos acuerdos, en los que podían recibir ayuda para el cumplimiento de sus obligaciones. Determinados AMUMA, como el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea y la Convención sobre el Cambio Climático, hacían más hincapié en el desarrollo de sistemas firmes y eficaces para los casos de incumplimiento que en el régimen de solución de diferencias para reforzar la integridad de sus obligaciones jurídicas básicas. El carácter cooperativo y preventivo de los mecanismos de solución de los incumplimientos estaba más en consonancia con los objetivos y obligaciones de los AMUMA que los enfoques centrados en demandas de indemnización, sanciones y represalias. En algunos casos, el daño ambiental causado por la actividad humana podía ser irreversible; en otros, restablecer el medio ambiente a un estado aceptable, que no al suyo original, podía ser difícil de lograr. También era complicado ponerse de acuerdo sobre el modo de evaluar monetariamente el daño ambiental y establecer relaciones causales entre la actividad humana y sus efectos transfronterizos.

14. El Canadá apoyaba el desarrollo en los AMUMA de regímenes firmes y eficaces en materia de cumplimiento, y creía que debían considerarse varios elementos en su elaboración, como la identificación del posible incumplimiento, la determinación del incumplimiento y sus consecuencias, la supervisión y determinación del retorno al cumplimiento y un procedimiento de examen automático respecto de los futuros incumplimientos. El objetivo de cualquier sistema de control del cumplimiento debía ser la corrección del incumplimiento de manera fácil y cooperativa. La naturaleza de todo régimen en materia de cumplimiento necesitaba adaptarse al logro del objetivo ambiental concreto del AMUMA. Su funcionamiento tenía que contribuir al consenso internacional, y debía ofrecer incentivos a las partes para que lo utilizaran. La estructura y alcance de los regímenes en materia de cumplimiento, por consiguiente, no debían reinstaurar mecanismos de solución de diferencias con otro nombre, sino ofrecer un instrumento eficaz para evitar los conflictos y resolver las cuestiones relacionadas con la actuación de cada parte en el marco del AMUMA. Sería útil que las secretarías de los AMUMA que utilizaran procedimientos por incumplimiento pudieran mantener

informado al CCMA sobre su desarrollo y funcionamiento, con inclusión de las medidas adoptadas para ayudar a los países en desarrollo y los países con economía en transición en el cumplimiento de sus obligaciones. En opinión del Canadá, los mejores mecanismos de control del cumplimiento de los AMUMA eran en sí más apropiados que la solución de diferencias y reducirían el riesgo potencial de conflictos, tanto en el marco de los AMUMA como a través del inconveniente planteo en la OMC de controversias relacionadas con los AMUMA.

15. El representante de las Comunidades Europeas dijo que la información facilitada por las secretarías de los AMUMA mostraba la tendencia hacia el desarrollo de una relación más armoniosa entre los AMUMA y los Acuerdos de la OMC. Esto se manifestó, por ejemplo, en la exitosa negociación del Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP). Los recientes acontecimientos referentes al Convenio de Basilea también eran alentadores, en particular la adopción de los anexos VIII y IX en la Cuarta Conferencia de las Partes. Del mismo modo, era interesante señalar que las disposiciones del Protocolo de Kyoto sentaban las bases para explorar las sinergias entre la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente en el campo del cambio climático. De hecho, la eliminación de las distorsiones al comercio, contrarias a los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático, se encontraba entre las políticas y medidas que debían adoptar los países incluidos en el anexo I. Tras haber escuchado las exposiciones de los AMUMA cabía preguntarse por qué la cuestión de estos Acuerdos había generado tantas divisiones. Si bien había mejorado el ambiente general del CCMA, también estaba claro que había habido cierta línea divisoria de carácter geográfico en las deliberaciones previas a la reunión de Singapur. Esta línea divisoria podría estar repercutiendo todavía en la labor del CCMA en relación con los AMUMA. Las posiciones en el CCMA parecían determinadas por la impresión de que las disposiciones comerciales de los AMUMA perjudicaban a los países en desarrollo. De hecho, el objetivo de varios AMUMA relacionados con el comercio, incluidos el Convenio de Basilea, el Convenio del CFP y el Protocolo sobre Bioseguridad, era responder a las legítimas preocupaciones de los países en desarrollo.

16. Las Comunidades Europeas consideraban que el punto primero debía seguir siendo una prioridad para el CCMA. Había expectativas que el CCMA tenía que satisfacer puesto que estaba en juego la credibilidad de la OMC. El orador manifestó que la incapacidad del Comité para responder a las preguntas del PNUMA en la sesión de información de los AMUMA resultaba embarazosa para todas. La posición de las CE sobre estos acuerdos era de sobra conocida. Resultaba esencial idear mecanismos eficaces para desarrollar una relación más armoniosa entre los AMUMA y los Acuerdos de la OMC. Sería importante dar cabida a algunas medidas comerciales adoptadas por las partes de los AMUMA; esto por sí mismo no supondría una gran revolución, puesto que las normas de la OMC ya ofrecían un margen considerable para dar cabida a la utilización de las medidas comerciales necesarias para fines ambientales. Ello se corroboraba con la interpretación otorgada al artículo XX en la práctica de la solución de diferencias. En la reunión de marzo de 1998, las CE habían formulado observaciones sobre el documento WT/CTE/W/53 en lo relativo a la jurisprudencia sobre el artículo XX. Habría que abordar de nuevo este tema, y sería útil considerar si el Órgano de Apelación ratificaba, en el caso que actualmente tenía pendiente, los criterios desarrollados por la jurisprudencia anterior. El punto primero abarcaba más cuestiones que las de los AMUMA. Por esta razón, podría ser útil también ampliar el margen del análisis para considerar la jurisprudencia sobre otras disposiciones de la OMC; por ejemplo, algunas resoluciones del Órgano de Apelación en el asunto referente a las hormonas podían ser pertinentes para la labor del CCMA. Determinados elementos, como el principio de la precaución, podrían estudiarse con más detenimiento. Era importante proseguir los diálogos informales con las secretarías de los AMUMA no sólo para tener una apreciación general de los acontecimientos en otros foros internacionales sino como labor de generación de confianza.

17. El representante de Australia recibía con agrado la participación de las secretarías de los AMUMA en la sesión de información; tales reuniones desempeñaban el valioso papel de mejorar la coordinación de la política sobre comercio y medio ambiente. Era importante basarse en este intercambio de información para reforzar la coordinación sobre las cuestiones relacionadas con

la OMC y con los AMUMA. El conocimiento derivado de la experiencia era un factor inestimable para el desarrollo futuro de los AMUMA. La sesión de información había resaltado algunos factores clave, incluyendo la diversidad de aspectos relacionados con la formulación de políticas sobre los AMUMA: problemas ambientales, condiciones y objetivos, y aspectos científicos y técnicos para la evaluación y supervisión; condiciones económicas, incluidos los factores comerciales, tecnológicos y de producción; y las perspectivas y prioridades de los países implicados, y su entorno político, institucional y jurídico. Esto resaltaba la importancia de la participación de funcionarios de esferas diferentes en la formulación de los AMUMA y de la coordinación de todos esos factores a nivel nacional. Esta variedad sugería una diversidad de respuestas, como ponía de manifiesto la variedad de enfoques de los distintos AMUMA. Era importante la flexibilidad de los AMUMA para permitir aquella diversidad, especialmente en el curso del tiempo, es decir, a través de los cambios de capacidad de los países para resolver los problemas; o para la consideración de las restricciones sobre los materiales. Debía adoptarse un enfoque global, de modo que las medidas comerciales de los AMUMA no fueran consideradas de forma aislada, sino como un elemento que podía resultar adecuado en algunas circunstancias. La transparencia era otro aspecto importante de la formulación de políticas sobre los AMUMA. El procedimiento de catalogación del Convenio de Basilea había aclarado el grado de cobertura de los productos químicos, reduciendo la incertidumbre sobre el posible comercio futuro de reciclables.

18. La facilitación de información cumplía un papel importante en los AMUMA, y constituía el núcleo del Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo y del Protocolo sobre Bioseguridad; podría ayudar a los países a evaluar los riesgos ambientales relacionados con el comercio a fin de concentrar los recursos en las esferas con problemas reales, sin ocuparse innecesariamente de otros sectores de actividad. Esto podía tener un efecto global de facilitación del comercio. Había dos niveles para abordar las medidas comerciales de los AMUMA: la interacción global con el comercio y el diseño de medidas comerciales específicas dentro de los AMUMA. Como la mayoría de ellos no incorporaban medidas comerciales, era probable que el anterior nivel fuera más significativo para el comercio. Australia pedía a la Secretaría que efectuara un seguimiento sobre cualquier estimación cuantitativa de la repercusión de las disposiciones de los AMUMA sobre los flujos comerciales, bien en una perspectiva global, o respecto de medidas comerciales específicas. Puesto que el Protocolo sobre Bioseguridad era un ejemplo de AMUMA que podría tener repercusiones comerciales significativas, la cuestión fundamental sería garantizar que las partes importadoras tuvieran información suficiente para centrar sus limitados recursos en las esferas de mayor riesgo ambiental, sin proporcionar obstáculos adicionales al comercio (o pretextos para restringirlo) ni desalentar el desarrollo y la investigación de biotecnología segura. Si el Protocolo conseguía este objetivo, facilitaría el apoyo mutuo de las políticas en materia de comercio y medio ambiente. El fracaso podía tener repercusiones costosas, incluso el comercio ya existente, lo que por sí sólo podría tener más peso que la incidencia de una medida comercial específica adoptada en un AMUMA. Como Australia había manifestado en la sesión de información sobre los AMUMA, era fundamental dar plena participación a los funcionarios de comercio en estas negociaciones.

19. Australia reconocía que las normas de la OMC proporcionaban a los países la capacidad para proteger su medio ambiente. Dichas normas no parecían haber impedido la formulación y aplicación de medidas multilaterales apropiadas para promover la protección del medio ambiente, incluso medidas comerciales, como lo demostraba el hecho de que no se hubiera impugnado ninguna de las medidas comerciales de los AMUMA. Cabía también aducir que las disciplinas de la OMC, en particular el artículo XX, fomentaban la elaboración de medidas comerciales de los AMUMA en favor de la claridad y la transparencia, la simplicidad y la adecuación a los factores pertinentes, incluidos los aspectos económicos y comerciales.

20. La representante del Japón agradeció al Canadá su declaración, que sería estudiada por su delegación. Los debates sobre los puntos primero y quinto habían revelado la dificultad de abordar la relación entre las medidas comerciales de los AMUMA y la OMC. El CCMA debía seguir esforzándose en plantear esta interrelación para garantizar los enfoques multilaterales en el

planteamiento de los problemas ambientales globales, evitando al mismo tiempo la utilización de medidas comerciales unilaterales. También facilitaría el apoyo mutuo del comercio y el medio ambiente. La exposición del PNUMA en la sesión de información sobre los AMUMA, en particular las preguntas planteadas, proporcionaba los elementos de una forma de enfocar esta cuestión. El CCMA debía responder a las preguntas del PNUMA, aclarando concretamente lo que el Comité consideraba como medidas comerciales de los AMUMA que eran compatibles con la OMC.

21. Una posible solución era la elaboración de un conjunto de criterios para las medidas comerciales de los AMUMA. Tales criterios podrían incluir los puntos siguientes: i) que dichos Acuerdos tuvieran como objetivo claro la protección del medio ambiente; ii) que tuvieran un carácter universal a la luz de su objetivo, incluyendo las partes con comercio e intereses económicos relevantes y significativos; iii) que sus medidas comerciales hubieran sido negociadas sobre la base del conocimiento de expertos en medio ambiente como medidas necesarias para alcanzar su objetivo; y iv) que las partes hubieran acordado la adopción de las medidas comerciales de los AMUMA. La propuesta del Japón sobre directrices en relación con los AMUMA (WT/CTE/W/31) se basaba en esta idea, y podría desarrollarse con más profundidad mediante la introducción del enfoque diferenciado. El Japón era consciente de que el debate sobre este tipo de criterios provocaba opiniones diversas, y que los criterios indebidamente estrictos podían paralizar las negociaciones sobre los AMUMA. Como esto seguiría ocurriendo mientras los debates permanecieran en el plano abstracto, había que centrarlos en ejemplos concretos. No se había planteado ninguna diferencia en la OMC relacionada con medidas comerciales de los AMUMA vigentes. Cabía entonces la posibilidad de analizar las medidas comerciales específicas de dichos Acuerdos, como las de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio de Basilea y el Protocolo de Montreal, a fin de diseñar un modelo de medidas comerciales compatibles con la OMC. Este procedimiento no suponía juzgar en el CCMA medidas comerciales determinadas de cada AMUMA. Sin embargo, dichas medidas podrían usarse como punto de referencia. Sería útil estudiar un marco que ofreciera previsibilidad acerca de la compatibilidad con la OMC de las medidas comerciales de los AMUMA. Los informes de la OCDE y del PNUMA que analizaban las medidas comerciales de la CITES, el Convenio de Basilea y el Protocolo de Montreal podrían resultar de utilidad para el análisis.

22. La representante de Nueva Zelandia dijo que el objetivo de su delegación era establecer vías en las que el CCMA pudiera fomentar la complementariedad entre los objetivos comerciales y los ambientales. En 1998, se habían logrado progresos en el marco del grupo de acceso a los mercados, determinando hasta qué punto la liberalización del comercio y la eliminación de las políticas de distorsión del comercio contribuían a un medio ambiente mejor. El CCMA necesitaba estudiar las cuestiones en función de esa complementariedad, que debía plantearse en cada nivel en que se formularan políticas ambientales y comerciales en el marco de los Estados y en los foros multilaterales. Para tratar de conseguir una relación complementaria, los Miembros debían garantizar una mejor comprensión de las cuestiones subyacentes a los debates del CCMA y una coordinación eficaz entre los funcionarios encargados del comercio y el medio ambiente en los AMUMA. En Nueva Zelandia se celebraban intensas consultas entre los departamentos gubernamentales, los organismos y las partes interesadas sobre cuestiones comerciales y ambientales mediante debates habituales intradepartamentales, interdepartamentales y entre organismos, reuniones de información de organizaciones no gubernamentales y difusión ordinaria de información pública. A nivel internacional, podría hacerse mucho para reforzar la complementariedad entre las medidas dispuestas en los AMUMA y las normas de la OMC. Era importante garantizar que los AMUMA incluyeran mecanismos eficaces para resolver las diferencias a fin de evitar que la carga de la solución de controversias relacionadas con las medidas establecidas en dichos acuerdos recayera por defecto en la OMC. Debía darse una adecuada prioridad a este aspecto en las negociaciones sobre los AMUMA. En este sentido, las reuniones ordinarias de información sobre los AMUMA en el CCMA cumplían un importante papel. Nueva Zelandia estudiaría otras propuestas para reforzar el intercambio de información entre la OMC y los AMUMA. Podría ser útil considerar un enfoque temático para las reuniones de información sobre los AMUMA, centrándolas en cuestiones específicas, como el

cumplimiento de las disposiciones o la solución de diferencias. Dichas reuniones eran un complemento, y no un sustitutivo, para una coordinación nacional eficaz. Como la mayoría de los Miembros de la OMC eran también Partes en los AMUMA más importantes, los funcionarios nacionales debían adoptar un enfoque coherente en ambos foros.

23. Además de estas medidas prácticas e inmediatas, había que seguir reflexionando sobre el marco que sustentaba la relación entre la OMC y los AMUMA. Desde la creación del CCMA, y también en la preparación de la Conferencia Ministerial de Singapur de 1996, se había debatido extensamente esta cuestión; en el informe del CCMA de 1996 figuraba una amplia gama de opiniones y documentos sobre la manera de abordarla. El documento de Nueva Zelandia (WT/CTE/W/20) defendía un enfoque basado en la especificidad de cada medida, y en que se aplicara o no entre los países partes del Acuerdo y otros países. En ese documento se proponía un entendimiento destinado a aclarar la aplicación de las disposiciones de la OMC a las medidas comerciales de los AMUMA. Se aceptaba comúnmente que los países tenían un considerable margen para aplicar medidas comerciales con fines ambientales de manera compatible con la OMC. A más largo plazo, un entendimiento, como el que sugería Nueva Zelandia, ayudaría a los negociadores tanto de cuestiones relacionadas con el comercio como con el medio ambiente a garantizar que sus sistemas respectivos fueran compatibles, y fomentaría una mayor cooperación. Conforme al objetivo de un apoyo mutuo de las políticas comerciales y ambientales, esa solución también sería coherente con el punto de vista de que la cooperación multilateral era más eficaz que la actuación unilateral para la consecución de objetivos ambientales globales, como se reconocía en el Principio 12 de la Declaración de Río.

24. Al aclarar la relación entre las normas de la OMC y los AMUMA, debía lograrse un equilibrio entre las obligaciones contraídas por los Miembros de la OMC y el problema mundial de la protección del medio ambiente. A la hora de desarrollar su propuesta, Nueva Zelandia quería permitir la utilización de medidas comerciales en circunstancias definidas para progresar en los objetivos ambientales cuando fueran necesarios, pero garantizando que dichas medidas no se aplicaran con fines proteccionistas. Cualquier medida comercial de los AMUMA debía ser capaz de conseguir apoyo internacional y ser considerada como la manera más eficaz para alcanzar el objetivo final. También sería claramente beneficioso que el establecimiento de medidas ambientales quedara sujeto a una firme justificación científica como se requería, por ejemplo, en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En 1996 y hasta la fecha no se había llegado a ningún acuerdo sobre cuál sería un enfoque aceptable de esta cuestión. Si bien no era útil volver a un debate detallado sobre determinadas propuestas, la subsiguiente labor del CCMA debía reflexionar sobre los principios y consideraciones comunes que sustentaban varios enfoques, aun cuando variaran los detalles específicos de cada propuesta. También debía tenerse en cuenta la evolución de la jurisprudencia sobre el artículo XX del Acuerdo General. Aunque todavía no se hubieran planteado en la OMC diferencias relacionadas específicamente con las medidas de los AMUMA, no debía descartarse la posibilidad futura de su existencia. Habían aumentado las referencias a las medidas comerciales de los AMUMA vigentes y de los tratados en fase de negociación, que subrayaban la necesidad de garantizar la continuación de la labor a nivel nacional e internacional en el desarrollo de una mejor comprensión y de un enfoque más coordinado a fin de evitar posibles conflictos. Nueva Zelandia esperaba explorar nuevas vías para progresar en esta cuestión.

25. El representante de Corea dijo que, como figuraba en el informe del CCMA de 1996, las soluciones multilaterales basadas en la cooperación internacional eran la manera más eficaz de abordar los problemas ambientales transfronterizos globales por parte de los gobiernos. El informe del Grupo Especial de la OMC sobre Camarones y Tortugas reforzaba la convicción de Corea de que debían evitarse las medidas comerciales unilaterales impuestas extrajurisdiccionalmente para abordar problemas ambientales. Hasta la fecha, las medidas comerciales de los AMUMA no habían suscitado ninguna controversia entre las partes de los AMUMA, ni habían presentado complicación jurídica alguna para la OMC. Sin embargo, si las medidas comerciales de los AMUMA no estaban dispuestas expresamente, podrían entrar en conflicto con las normas de la OMC. En este sentido, Corea había

propuesto analizar las medidas comerciales de los AMUMA a la luz de su especificidad y según se aplicaran o no a las partes y a los demás países. Desde la Conferencia Ministerial de Singapur, el CCMA no había dedicado suficiente tiempo al estudio de la metodología para proseguir los debates. El enfoque diferenciado, propuesto por Nueva Zelanda y Corea, podría utilizarse como base para una interacción de apoyo mutuo entre el comercio y el medio ambiente. Aunque se reconocía que, en ciertos casos, las medidas comerciales eran eficaces para alcanzar los objetivos de los AMUMA, dichas medidas no eran los únicos instrumentos de política que empleaban. Para garantizar una aplicación eficaz de los AMUMA era indispensable una combinación de políticas, como la transferencia de tecnología y el desarrollo de la capacidad. El Protocolo de Montreal debía mucho de su éxito a la combinación de instrumentos de política, incluida la solución del problema del aumento de costos a través del Fondo Multilateral. El Protocolo de Kyoto había introducido el concepto de aplicación conjunta y el mecanismo para un desarrollo limpio como incentivos para facilitar la aplicación. La eficacia de las medidas propuestas no debía examinarse sólo en los AMUMA, sino también en la OMC. No cabía esperar por el momento progresos en el punto quinto, ya que estaban relacionados con el primero y éste se encontraba en un punto muerto. Como se indicaba en el Informe del CCMA de 1996 (párrafo 178), si se planteara una controversia entre países Miembros de la OMC que fuesen Partes de un AMUMA durante la utilización de las medidas comerciales que aplicaban entre sí de conformidad con un AMUMA, debían intentar resolverla en función de este Acuerdo. Podía citarse también a este respecto el artículo 3 del Entendimiento sobre la Solución de Diferencias de la OMC.

26. El representante de Suiza dijo que la sesión de información sobre los AMUMA había mostrado que estaba mejorando la comprensión de los vínculos entre la protección del medio ambiente y las normas de la OMC, como ponía de manifiesto, por ejemplo, la negociación del Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP). Podría mejorarse la estructuración de las sesiones de información sobre los AMUMA para reforzar la coordinación y el intercambio de información entre el CCMA y los AMUMA. Los vínculos entre las normas de la OMC y las medidas comerciales de los AMUMA seguían siendo una cuestión prioritaria para Suiza. Su país siempre había mostrado un especial interés en el punto primero, como demostraban la propuesta suiza (20 de mayo de 1996) y las declaraciones reiteradas sobre dicho punto. La protección del medio ambiente era una preocupación diaria para personas y gobiernos. Con el fin de resolver los problemas ambientales cuyo alcance desbordaba las fronteras nacionales, los Estados habían concluido muchos AMUMA. Algunos contenían disposiciones relacionadas con el comercio que autorizaban u obligaban a las partes a adoptar medidas comerciales para alcanzar objetivos ambientales. No le correspondía a un foro comercial, como el CCMA, criticar estas disposiciones, que existían y se habían adoptado y ratificado de manera amplia por una parte importante de la comunidad internacional. La OMC debía concentrar su labor en evitar que dichas medidas comerciales, adoptadas de conformidad con un AMUMA, se aplicaran con fines proteccionistas.

27. El artículo XX permitía a los Miembros de la OMC la adopción de medidas para proteger el medio ambiente siempre que se cumplieran las condiciones que figuran en el encabezamiento de dicho artículo. La pregunta en la que había que centrarse no era sobre si estas disposiciones de los AMUMA estaban en consonancia con las normas de la OMC, sino sobre la manera en que las partes de los AMUMA aplicaban dichas disposiciones. En este momento era cuando podía ser mayor el riesgo de uso incorrecto de los objetivos ambientales perseguidos por los AMUMA. El Órgano de Apelación compartía esta opinión, como se ponía de manifiesto en el informe sobre la Gasolina: "Por sus términos explícitos, el preámbulo (del artículo XX) se refiere, no tanto a la medida impugnada o a su contenido específico propiamente tal, sino más bien a la manera en que la medida se aplica". La finalidad y objeto del preámbulo, según el Órgano de Apelación, era evitar el abuso de las excepciones previstas en el artículo XX. Cuanto más precisas fueran las obligaciones de las partes de los AMUMA, menor sería el riesgo de elusión de los objetivos de los AMUMA con otros fines. Esta era la razón por la que la propuesta de Suiza sobre una "cláusula de coherencia" se restringía a las disposiciones comerciales específicas adoptadas al amparo de los AMUMA.

28. Las sesiones de información sobre los AMUMA habían mostrado que, aunque no se hubiera sometido al mecanismo de solución de diferencias de la OMC ninguna controversia respecto a la conformidad de las medidas comerciales adoptadas en aplicación de los AMUMA, en la mente de los negociadores subsistían dudas cuando consideraban si sería necesario introducir disposiciones que autorizaran a las partes a adoptar medidas comerciales para el cumplimiento de los objetivos del AMUMA. Dichas dudas debían ser abordadas. Suiza había propuesto complementar los Acuerdos del Anexo I de la OMC con un memorándum de entendimiento sobre las medidas comerciales adoptadas en aplicación de los AMUMA. La propuesta de Suiza seguía estando sobre el tapete y su delegación estaba dispuesta a debatir sus detalles. Para seguir trabajando sobre este punto se había sugerido utilizar un enfoque diferenciado, mediante el cual se identificarían distintos tipos de disposiciones comerciales de los AMUMA; se establecería entonces una distinción entre las condiciones de aplicación de esas disposiciones y se buscarían posibles soluciones para cada caso. A pesar de que este enfoque tenía aspectos teóricos interesantes, debido a su complejidad no ayudaría a resolver el problema que se estaba examinando en relación con el punto primero. Las sugerencias del Canadá ofrecían una solución interesante a corto plazo. A medio plazo, sin embargo, Suiza consideraba, de acuerdo con la declaración de las Comunidades Europeas, que era necesario desarrollar un marco para definir la condición jurídica de las medidas comerciales adoptadas en aplicación de los AMUMA.

29. El representante de Turquía dijo que el volumen de trabajo y la variedad de las opiniones indicaba lo delicado e importante que era este punto para la labor del CCMA. Los AMUMA eran uno de los mejores instrumentos para abordar los problemas ambientales mundiales o transfronterizos, y entre los objetivos comerciales y ambientales había, más que conflicto, complementariedad. Debido a la creciente complejidad de los problemas ambientales y al carácter evolutivo de los AMUMA, la mejor manera de avanzar era aumentar la coordinación entre quienes se dedican a los temas del comercio y del medio ambiente a nivel nacional e internacional, y entre las Secretarías de los AMUMA y la OMC. Turquía acogía con agrado las sesiones de información sobre los AMUMA. Cuanto más aumentaba el carácter de universalidad de un AMUMA a través de su ámbito y participación, más se aproximaba a los fundamentos en que se basaba la OMC. Por consiguiente, otra manera de evitar los conflictos eventuales y hacer que los AMUMA y la OMC se apoyaran mutuamente en la solución de los problemas ambientales internacionales era mejorar la participación en los AMUMA. Las medidas comerciales de los AMUMA podían ser aplicadas como último recurso para abordar problemas ambientales; se necesitaba un conjunto equilibrado de medidas para lograr los objetivos de los AMUMA. Habida cuenta de los incentivos y medios financieros que el comercio sostenible ofrecía para la protección del medio ambiente, en particular para los países en desarrollo, era preciso ampliar las posibilidades comerciales.

30. Según la interpretación de los grupos especiales de la OMC, el artículo XX establecía excepciones limitadas y condicionales a las obligaciones de la OMC. Las medidas comerciales de los AMUMA debían ser proporcionales, no discriminatorias y lo menos restrictivas posible para el comercio; debían satisfacer asimismo los criterios de efectividad y necesidad expuestos en el artículo XX. Tenía que evitarse la actuación unilateral y la utilización extrajurisdiccional de las medidas comerciales para reducir al mínimo la incompatibilidad con el régimen de la OMC. Sin embargo, no todas las medidas comerciales de los AMUMA planteaban cuestiones de compatibilidad, y, cuando lo hacían, sus efectos no eran de la misma magnitud. Sería útil efectuar un análisis de los efectos y la efectividad de las medidas comerciales utilizadas para alcanzar los objetivos de los AMUMA. Como figuraba en el documento WT/CTE/W/53, las medidas debían examinarse e interpretarse con arreglo al artículo XX. Había que estudiar con más profundidad el concepto de "especificidad". Habida cuenta de que las controversias surgidas hasta el momento habían derivado de actuaciones unilaterales, al evitar la utilización de medidas comerciales no acordadas multilateralmente se evitarían los eventuales conflictos.

31. El representante de Noruega dijo que la principal tarea que se planteaba en relación con este punto era aclarar cómo podía lograrse que dos conjuntos de compromisos jurídicos (las normas de

la OMC y los AMUMA) fueran complementarios a fin de evitar los conflictos. Los problemas se referían a los países Miembros de la OMC que no eran partes en los AMUMA. Entre las partes de un AMUMA, éste tenía carácter de *lex specialis* y cabía suponer que prevalecía sobre las normas de la OMC. En la reunión de septiembre de 1997, varios Miembros habían reconocido que el CCMA se enfrentaba principalmente a dos opciones: i) basarse en la evolución de la jurisprudencia (el *statu quo*); o ii) formular soluciones para dar cabida a las medidas comerciales de los AMUMA en la OMC. Durante los años en los que el CCMA había debatido los puntos primero y quinto se habían producido novedades en la vertiente ambiental. Los AMUMA, como medio para resolver los problemas ambientales mundiales o transfronterizos, habían aumentado en número e importancia, como se puso de manifiesto en las dos reuniones de información sobre los AMUMA celebradas en el CCMA. El desarrollo de los AMUMA, como manera eficaz de resolver los problemas ambientales a escala mundial, reduciría probablemente la necesidad de recurrir a medidas unilaterales y extrajurisdiccionales. Hasta cierto punto, los AMUMA aplicaban también el principio de precaución, por ejemplo en el Protocolo de Montreal. Varios grupos especiales de la OMC, incluido el grupo especial sobre las prohibiciones de importación de determinados camarones y productos derivados del camarón (parte VII del documento WT/DS58/R), concedían importancia al hecho de haber intentado la cooperación internacional antes de aplicar la medida restrictiva del comercio. La negociación de un AMUMA o la medida para resolver un problema ambiental mundial o transfronterizo era, en opinión de dicho grupo especial, una manera posible de evitar la amenaza al sistema comercial (párrafo 55). Noruega reiteraba la propuesta formulada en la reunión de septiembre de 1997 de que algunas cuestiones fueran estudiadas más a fondo que otras en la búsqueda de una posible articulación, como por ejemplo la relación entre las partes de un AMUMA y los países que no lo son, los procesos y métodos de producción no relacionados con productos, la especificidad de las medidas comerciales, y la composición y el carácter abierto de los AMUMA. El debate sobre este tipo de cuestiones se facilitaría gracias a documentos fácticos y analíticos basados en las actas de las reuniones del CCMA.

32. El representante de la Argentina dijo que había habido un diálogo positivo en la sesión de información sobre los AMUMA. La declaración del PNUMA había planteado varios retos. Era interesante que el PNUMA hubiera observado que los AMUMA contenían conjuntos de medidas para abordar problemas ambientales que sólo eran eficaces si se aplicaban globalmente, por ejemplo para eliminar la producción y el comercio de un producto perjudicial para el medio ambiente. Era necesario que ese conjunto de medidas fomentara el acceso a la tecnología haciendo posible la sustitución de los productos. Durante el análisis en el CCMA, la Argentina había sostenido que había que examinar los conjuntos de medidas que figuraban en los AMUMA. Las preguntas planteadas por el PNUMA eran interesantes, y no le resultaría fácil al CCMA responder a todas ellas, pero podría intentarlo con algunas. Por ejemplo, el PNUMA había preguntado cuándo se consideraba que las medidas comerciales eran compatibles con las normas de la OMC. Esta cuestión se había debatido en el CCMA durante los últimos años sin recibir respuesta alguna. Podrían realizarse progresos mediante la definición de las medidas que eran claramente incompatibles con el régimen de la OMC. Con respecto a la cuestión de los principios ambientales, en particular el principio de precaución, resultaba pertinente el informe del Órgano de Apelación en el asunto de las hormonas. Cualquier decisión relacionada con un problema entre Estados Miembros conducía a obligaciones aplicables a ese caso y entre esas partes. No obstante, era importante la conclusión del Órgano de Apelación de que el principio de precaución figuraba en el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pero que dicho principio podía ir más allá de las disposiciones de ese artículo. Esto obligaba a evitar la utilización del principio de precaución como una justificación del proteccionismo. La aplicación de dicho principio de conformidad con el Acuerdo sobre MSF debía ser provisional con el fin de obtener información para evaluar el riesgo. Como sugerían las Comunidades Europeas, sería útil abrir un debate futuro sobre esta cuestión en el CCMA.

33. El representante de las Comunidades Europeas dijo que era útil la metodología del enfoque diferenciado propuesta por Nueva Zelanda y Corea. Otras propuestas, como las de las CE, también se basaban en situaciones diferenciadas de los AMUMA. El informe del CCMA de 1996 se basaba igualmente en la distinción entre las partes de los AMUMA y quienes no eran parte en los mismos, así

como en la especificidad de las medidas comerciales. Los elementos sugeridos por este enfoque se habían usado de manera general a lo largo de la labor del CCMA. Subsistían dudas, sin embargo, respecto de los criterios sustantivos que se habían propuesto para cada una de las situaciones identificadas sobre la base del enfoque diferenciado.

34. El representante de Egipto dijo que, aunque el *Programa 21* establecía varias medidas positivas para ayudar a los países en desarrollo a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, no se habían alcanzado muchos progresos concretos a este respecto. La OMC tendría que abordar su relación con los AMUMA. Podría ser difícil plantear la gama de medidas positivas en la Organización; sin embargo, fomentar la transferencia de tecnología y mejorar el acceso a los mercados entraba dentro de su competencia, y debía ocuparse de ello.

35. El representante de los Estados Unidos expresó el agradecimiento de su delegación por las exposiciones de las secretarías de los AMUMA en la sesión de información. De haber una frustración sobre la misma, sería la de haber querido abarcar demasiado en un solo día y no haberle podido hacer justicia a la calidad de los conocimientos especializados puestos a disposición de CCMA. Éste era un aspecto que debía ser considerado en la organización de futuras reuniones con los AMUMA. El orador señaló que se habían planteado nuevos aspectos en dicha reunión, por ejemplo por parte del Canadá. Destacó asimismo la importancia de la coordinación, que era una esfera en la que había que seguir avanzando. Aunque estaba aumentando la participación en el CCMA de los organismos encargados del medio ambiente, podían hacerse mejoras a este respecto. Era necesario hacer mucho más por la parte de la ecuación que le correspondía a los AMUMA. Las negociaciones del Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) habían logrado incorporar en los trabajos los conocimientos especializados en materia de comercio; se había dado participación a especialistas en el tema no como agentes de control, sino para que ayudaran a que el acuerdo fuera lo más funcional posible. Sin embargo, al observar otras negociaciones se advertía que ésta era la excepción y no la regla. Por ejemplo, en las negociaciones sobre Bioseguridad, que tenían efectos potencialmente enormes sobre el comercio, sólo habían participado unos pocos expertos en comercio. Los Estados Unidos se refirieron a la observación formulada por las Comunidades Europeas sobre el número de casos en que los países en desarrollo buscaban medidas comerciales en los AMUMA, tales como el Convenio de CFP y el Convenio de Basilea. Seguía habiendo un desfase de vocabulario entre los funcionarios encargados del comercio y los del medio ambiente, como en lo referente a la utilización de la expresión "medidas positivas". Era importante emplear términos que tuvieran significado para ambos grupos de funcionarios. Cuando se utilizó aquella expresión por primera vez en la UNCTAD, en referencia a la sugerencia de que, como los gobiernos estaban adoptando medidas para mejorar su medio ambiente, podrían usarse medidas positivas para ayudarles a lograr este objetivo, no fue en el contexto de un AMUMA. Lamentablemente, la expresión se había utilizado después con referencia a los AMUMA.

36. El orador, en sus observaciones sobre el documento WT/CTE/W/84, dijo que el Foro Intergubernamental sobre los Bosques no tenía el mandato de formular acuerdos comerciales. Dicho Foro era un órgano *ad hoc* de duración limitada, cuyo objetivo era formular recomendaciones sobre diversas cuestiones forestales, que incluían aspectos comerciales, para su consideración por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Se esperaba que el Foro abordara y aclarara algunas cuestiones relacionadas con el comercio y el medio ambiente en el sector forestal. Estas cuestiones se habían identificado claramente en el mandato del Foro Intergubernamental sobre los Bosques e incluían medidas comerciales que se habían dejado pendientes, como los obstáculos arancelarios y no arancelarios relacionados con la ordenación forestal sostenible, las cuestiones de certificación, cuando fueran pertinentes, y un mejor acceso a los mercados. La lista incluida en el documento WT/CTE/W/84 daba la impresión errónea de que los demás puntos incluidos en la Sección V formaban parte del programa comercial del Foro. Pero aunque podían ser cuestiones forestales importantes en otros contextos, el Foro no había acordado tratarlas en relación con el comercio.

37. La representante del Brasil se refirió a la observación formulada por las Comunidades Europeas sobre la sensación de los países en desarrollo de que las medidas comerciales de los AMUMA les eran perjudiciales; el Brasil no tenía esa opinión. Las medidas comerciales tenían un papel que cumplir en la protección del medio ambiente. Sin embargo, dichas medidas tenían efectos diferentes en los países en desarrollo. A este respecto, la oradora citó como ejemplo la enmienda de prohibición del Convenio de Basilea. Aunque la prohibición de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos era útil en la situación de algunos países en desarrollo, podría ser perjudicial para otros que contaran con alguna capacidad tecnológica para la gestión de desechos. El hecho de que esta medida específica fuera el resultado de un procedimiento multilateral basado en el consenso lo hacía más sencillo desde la perspectiva brasileña. En relación con las observaciones de la Argentina referentes a la pregunta del PNUMA sobre cuándo eran compatibles con la OMC las medidas de los AMUMA, la oradora preguntó si no podría empezarse dicho debate precisando que la respuesta no sería jurídica, sino subjetiva. Si esas medidas derivaban de una actuación multilateral basada en el consenso, debían considerarse compatibles con la OMC, puesto que formaban parte de un contexto específico y probablemente estaban incluidas en un conjunto de medidas necesario para abordar un caso concreto. La oradora acogía con agrado el diálogo con las secretarías de los AMUMA en la sesión de información. Gracias al CCMA existía en el Brasil mayor conciencia de la relación entre el comercio y el medio ambiente. El Brasil distribuiría su declaración efectuada en la sesión de información de los AMUMA sobre la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (WT/CTE/W/95).

38. El representante de la India dijo que la sesión de información sobre los AMUMA había sido instructiva. Era evidente que los AMUMA desarrollaban un conjunto de medidas, que a veces incluían medidas comerciales, para alcanzar sus objetivos. La India compartía el punto de vista de Turquía sobre la utilidad de dichas medidas comerciales y estaba de acuerdo con el Brasil en que estas medidas podrían tener efectos diferentes en los países en desarrollo. Se habían planteado varias preguntas en las exposiciones formuladas sobre los AMUMA, por ejemplo con respecto al Protocolo de Montreal. La India acogía con satisfacción los esfuerzos realizados en el Protocolo de Montreal para hacer disponible la tecnología en términos más justos y favorables, y estaba a la espera de futuros trabajos sobre las Decisiones IX/14 y IX/5. Aunque en el marco del Protocolo de Montreal se preveía asistencia técnica a los países en desarrollo para el cierre de ciertas unidades productoras de sustancias que agotan la capa de ozono, los lentos avances de la transferencia de tecnología impedían el progreso ambiental. La India estaba interesada en las novedades relativas al Protocolo de Kyoto. Como las emisiones de gases de efecto invernadero eran un problema de contaminación a escala mundial, era adecuado plantear la solución de este problema ambiental mediante ese tipo de AMUMA. En cambio, la solución de los problemas ambientales locales o regionales se abordaba mejor de manera local o regional. Como se afirmaba en el informe del CCMA de 1996, la solución ideal era la liberalización del comercio acompañada de adecuadas políticas ambientales nacionales. Con respecto a la utilización de la expresión "medidas positivas", la India apoyaba la sugerencia de Egipto de abordar en este contexto las cuestiones de transferencia de tecnología y de acceso a los mercados. En cuanto a los principios comerciales pertinentes para el medio ambiente, y viceversa, el orador recordó la contribución de la India en relación con el segundo punto (23 de julio de 1996). El CCMA había debatido sobre estos principios, incluido el principio de precaución. Según el informe del Órgano de Apelación sobre las Hormonas, el CCMA debía examinar la aplicación del principio de precaución, en particular para garantizar que no se empleara con fines proteccionistas.

39. El Presidente dijo que, para mejorar el diálogo en las sesiones de información sobre los AMUMA, podría dedicarse más tiempo a dichas reuniones, o bien podría reducirse el número de los AMUMA participantes.

Séptimo punto: La cuestión de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen

40. El representante de las Comunidades Europeas dijo que el documento WT/CTE/W/73 contenía un tratamiento exhaustivo de los productos comprendidos en distintos instrumentos internacionales que se ocupaban de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, así como de los modelos posibles de notificación sobre esas mercancías en la OMC. Las CE estaban dispuestas a refrendar la idea propuesta por muchos países en desarrollo, según la cual la OMC podría restablecer un sistema de notificación de aquellas mercancías. Sin embargo, la ausencia de una definición precisa de las mismas comprometería semejante procedimiento de notificación. Las CE pedían a la Secretaría que se pusiera en contacto con los instrumentos internacionales pertinentes a este respecto. El orador señaló que el modelo del anexo B del documento WT/CTE/W/73 podría tener repercusiones más amplias en las prácticas aduaneras.

41. El representante de Egipto dijo que el documento WT/CTE/W/73 era instructivo respecto a la labor de otros foros en materia de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. Egipto apoyaba los modelos de notificación de dichas mercancías utilizados entre 1983 y 1990.

42. El representante de los Estados Unidos dijo que el documento WT/CTE/W/73 mostraba la fértil actividad de varias organizaciones internacionales que contaban con grupos especializados competentes para el estudio de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen. Cualquier frustración acerca del debate sobre estas mercancías podía proceder del hecho de que la OMC no estaba tan bien situada como otras organizaciones para examinar dicha cuestión. Por ejemplo, las negociaciones para el Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo habían requerido una considerable especialización en conocimientos químicos. Si bien el CCMA debía considerar la contribución que podría hacer a la labor de otros foros, la especialización de éstos iba más allá de la del CCMA en esta esfera.

Octavo punto: Disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

43. El representante de los Estados Unidos agradeció a la India que hubiera facilitado sus observaciones por escrito antes de la reunión, y se reservó la posibilidad de presentar nuevas observaciones por escrito. Con respecto al documento WT/CTE/W/82, el orador observó que si bien en el mismo se indicaba el papel que la protección mediante patente desempeñaba en el fomento del desarrollo de productos favorables al medio ambiente, este documento tendía a una reducción de aquella protección para tales productos. Una reducción de la protección mediante patentes disminuiría la calidad y cantidad de productos disponibles. Sin tal protección, el orador preguntaba quién invertiría tiempo y dinero en la invención y desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales. Otra manera de ver la cuestión era preguntar si debía considerarse el aumento de la protección mediante patentes para tales productos a fin de fomentar su desarrollo. El documento de la India sostenía que las patentes restringían la competencia dando lugar a restricciones de la producción y a precios más elevados, lo que no era exacto. Bastaba con reparar en los países que contaban con una sólida protección mediante patentes, o que estaban reforzando dicha protección, para comprobar que estaba aumentando claramente la variedad de mercancías disponibles y a ello se sumaba, en la mayoría de los casos, una disminución de los precios. En los países donde la norma era la copia en lugar de la innovación, como la protección mediante patentes era débil o inexistente, las mercancías que implicaban desarrollos tecnológicos recientes eran más escasas y más caras. La propia experiencia de la India respecto del soporte lógico, que estaba protegido por su legislación sobre derecho de autor, debía indicar que la protección de los derechos de propiedad intelectual tenía efectos positivos en el mercado nacional de un país y en sus ingresos de exportación.

44. El párrafo 6 del documento WT/CTE/W/82 no había mencionado los factores que influyen directamente en la transferencia de tecnología y en el comercio (por ejemplo, las condiciones del país

para la inversión extranjera, las leyes y reglamentos sobre las importaciones, los procedimientos de aprobación de la comercialización, las condiciones del mercado, la infraestructura de transporte y distribución, etc.), porque estos factores "no podrían contribuir uniformemente a" la no disponibilidad de productos favorables para el medio ambiente. Dichos factores no necesitaban operar "uniformemente" en los países mencionados por la India para tener influencia primordial en la transferencia de tecnología y comercio de bienes. No podrían plantearse "problemas" conexos sin analizar los efectos de cada uno de esos factores, todos los cuales estaban bajo el control del país que invocara el hipotético problema. La India había pedido que los demás países, sin tener prueba alguna de la existencia del problema y sin que se hubiera hecho un análisis serio de todos los factores a los que podría deberse, acordaran debilitar su legislación sobre patentes o de lo contrario se responsabilizaran de esos problemas cuya existencia no se había demostrado. El párrafo 7 afirmaba que podían plantearse problemas en la aplicación de los AMUMA debido a un nuevo concepto mencionado como "normas virtuales", cuando hubiera varios productos sustitutivos disponibles pero el mercado tendiera hacia uno de ellos. Sin embargo, no se habían presentado pruebas de que tales normas pasaran de ser hipotéticas. Las normas de los AMUMA se negociaban y, durante la negociación, cada país tenía la oportunidad de señalar si sólo había un producto que cumpliera la norma considerada, pudiendo los negociadores ponerse de acuerdo en una norma que pudiera satisfacerse por diversos productos o tecnologías.

45. Con respecto al documento WT/CTE/W/85, los Estados Unidos comentaron que no tenía fundamento el argumento de la India de que debía modificarse el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC para que dicho país pudiera cumplir sus obligaciones de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Ningún punto del CDB obligaba a las partes a exigir que los solicitantes de patentes revelasen el país de origen de los materiales biológicos. La cuestión del consentimiento fundamentado previo, si bien era uno de los objetivos del CDB, no estaba relacionada con el procedimiento de otorgamiento de patentes, en particular porque la investigación en esta esfera no siempre daba objeto a una solicitud de patente, y no era pertinente al Acuerdo sobre los ADPIC. La India proponía diseñar un sistema *sui generis* de propiedad intelectual para las innovaciones locales contemporáneas, pero no había demostrado su necesidad. Las innovaciones contemporáneas, realizadas por investigadores individuales con estilos de vida tradicionales o por investigadores universitarios, eran patentables si eran nuevas, útiles y entrañaban una actividad inventiva. La India no había expuesto cuáles eran sus preocupaciones con respecto a esta materia y por qué se requería un sistema *sui generis* de propiedad intelectual para las prácticas locales no patentables. Sugería que las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC habían concluido antes del CDB y que, por lo tanto, debía revisarse el Acuerdo sobre los ADPIC a la luz del párrafo 5 del artículo 16 del CDB. La India se basaba en la afirmación de que la Ronda Uruguay concluyó en diciembre de 1991, puesto que después de esa fecha "se autorizaron muy pocos cambios" en el texto negociado. Las negociaciones no concluyeron hasta diciembre de 1993, y se efectuaron cambios importantes en el texto de Dunkel, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC. Como el CDB se concluyó en junio de 1992, era razonable suponer que los Miembros lo habían tenido en cuenta al tomar posiciones respecto del Acuerdo sobre los ADPIC.

46. La representante del Japón hizo una declaración preliminar sobre este punto. El Japón estaba estudiando las cuestiones que se habían planteado en relación con este punto, como la difusión de tecnologías y productos ecológicamente racionales (TPER) y las cuestiones relacionadas con los ADPIC. La importancia de la transferencia de tecnologías y el desarrollo de la capacidad se había señalado en el informe del CCMA de 1996 (párrafo 173). El Japón estaba estudiando si se podrían transferir TPER en condiciones más favorables. Una idea podía ser la de analizar si existían problemas concretos a este respecto. La difusión de TPER era importante para la protección del medio ambiente. Algunos Miembros consideraban que, para fomentar la innovación tecnológica, también era importante la protección de la propiedad intelectual. Al CCMA le correspondía buscar una solución equilibrada.

47. El representante de las Comunidades Europeas comentó que los derechos de propiedad intelectual y el respeto a la protección mediante patentes eran un asunto polémico. Los críticos de la protección mediante patentes no habían tenido en cuenta que los beneficiarios inmediatos de tal protección serían las propias personas, así como el medio ambiente, la diversidad biológica y el desarrollo sostenible. Un sistema eficaz de propiedad intelectual incentivaba la investigación y el desarrollo y, por consiguiente, la generación de tecnologías nuevas ecológicamente racionales; atraía la inversión al conceder protección a sus resultados. También fomentaba la transferencia de dichas tecnologías puesto que los titulares de derechos estarían más dispuestos a transferirlas voluntariamente. Un sistema de este tipo ayudaba a que los productores locales protegieran las inversiones, a diferencia de la política, de la usurpación por terceros, promoviendo así el desarrollo de la economía y los recursos nacionales para financiar la protección del medio ambiente. Un sistema eficaz de propiedad intelectual no ponía en tela de juicio la legislación nacional destinada a supervisar la aplicación de la investigación o la utilización y comercialización de sus resultados con fines ambientales, como en el caso de los clorofluorocarbonos; se habían otorgado patentes, pero las leyes de muchos países prohibían su utilización.

48. La protección mediante patentes no era, por muchas razones, un obstáculo para acceder a los conocimientos tradicionales. Eran patentables las invenciones, no los descubrimientos. La novedad y la actividad inventiva eran condiciones necesarias para la protección mediante patentes. Por ejemplo, si en una solicitud de patente se reivindicara un plaguicida de hojas de margosa, esa condición previa no podría cumplirse en caso de que existiera una producción autóctona. Era cierto, sin embargo, que los conocimientos autóctonos podían dar origen a que se desarrollara un nuevo procedimiento o producto patentable, por ejemplo por productores locales, y que, por alguna razón, el sistema de patentes vigente no pudiera proteger sus intereses. En este caso, el reconocimiento de la invención y retribución podría lograrse contractualmente entre las partes interesadas, los gobiernos, los institutos de investigación, los inventores y las comunidades indígenas, fuera del sistema de la propiedad intelectual, para proteger los beneficios. La participación en los beneficios no se limitaba a una decisión sobre quién debía ser el legítimo titular de los derechos. Un enfoque contractual permitía soluciones flexibles que tuvieran en cuenta cada caso. Un ejemplo de ello era la participación en los beneficios de la utilización de material genético del "smokebush" (*Cotinus coggygria*), que implicaba acuerdos entre el Gobierno de Australia, el Instituto del Consejo Nacional de los Estados Unidos y consorcios farmacéutico y de investigación de Australia, abarcando cuestiones como las regalías, la financiación de la investigación, la relación entre la investigación y la adquisición de tecnología, el acceso y el desarrollo comercial de un producto derivado de la flora australiana, así como las licencias de comercialización. La condición para una solución de este tipo era una estructura nacional en el país de origen del recurso genético. Sería útil que los Miembros, junto con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pudieran aportar ejemplos prácticos para demostrar la compatibilidad entre el Acuerdo sobre los ADPIC y la conservación de la diversidad biológica.

49. El representante de Colombia consideraba que era importante la relación entre el medio ambiente y el Acuerdo sobre los ADPIC. El CCMA debía analizar cuestiones como la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales, qué es lo que ocurría cuando un AMUMA disponía la utilización de un producto sujeto a protección mediante patente, la protección de organismos vivos y la protección de los conocimientos de los pueblos autóctonos. Las dos últimas cuestiones debían considerarse en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), que establecía que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos mediante políticas ambientales nacionales y la obligación de no emprender actividades que causen daño a terceros. En relación con el acceso a los recursos genéticos, el Grupo Andino, que incluye a Colombia, había aprobado la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, presentada ante el CCMA en una reunión anterior. Para asegurar que las actividades comprendidas en la jurisdicción de un país no causaran daño a terceros, el Acuerdo sobre los ADPIC debía ayudar a garantizar que la legislación nacional adoptada de acuerdo con las políticas ambientales nacionales y basada en los AMUMA fuera respetada por los terceros. El Acuerdo sobre los ADPIC tenía un importante papel que desempeñar a este respecto. Para los casos de invenciones relacionadas con organismos vivos, este Acuerdo debía exigir que las solicitudes de patentes indicaran

los orígenes de las muestras y una referencia acerca de si los organismos vivos se habían obtenido de conformidad con las normas del país de origen. Si estuviesen en juego conocimientos autóctonos, debía existir un certificado de conformidad con los criterios vigentes en el país de origen. Por ejemplo, si se pidiera una patente en un país Miembro de la OMC para una invención relacionada con un organismo vivo, o que implicara conocimientos tradicionales, debería indicarse en la solicitud el cumplimiento de los requisitos nacionales para acceder a esos recursos en el país de origen. Estos requisitos podían referirse, entre otras cosas, a la necesidad del consentimiento fundamentado previo mediante un contrato de acceso para explotar recursos genéticos. Si el solicitante no cumpliera estas disposiciones, no debería otorgársele la patente. La definición del acceso a los recursos genéticos correspondía al CDB y a cada país, así como la protección de los conocimientos autóctonos en su territorio. Un procedimiento de este tipo garantizaría, a través del Acuerdo sobre los ADPIC, que dichas normas fueran respetadas por los Miembros de la OMC.

50. El representante de Noruega recordó el acento que había puesto su delegación en la importancia de asegurar la compatibilidad al desarrollar y aplicar los AMUMA, y en mantener la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para la legislación en materia de derechos de propiedad intelectual relacionados con materiales vivos. Estos derechos procuraban fomentar la creatividad y la innovación, pero su extensión a los materiales vivos, incluidas las plantas y los animales, era un tema polémico y se habían planteado cuestiones difíciles a ese respecto. Los organismos vivos eran cualitativamente diferentes de los productos a los que tradicionalmente se había otorgado protección mediante derechos de propiedad intelectual. Había implicaciones de carácter ético, y no se habían explorado las posibles vinculaciones entre los regímenes de ese tipo de derechos y la reducción de la diversidad biológica, ya que los derechos de propiedad intelectual podrían impulsar la uniformidad genética. No estaban claros los criterios para distinguir una actividad inventiva de un descubrimiento. Algunos países consideraban que el contraste entre los sistemas de derechos de propiedad intelectual aplicados al sector industrial moderno y la falta de protección para los conocimientos tradicionales representaba una distribución injusta de los beneficios. Era deplorable la polarización cada vez mayor entre los proveedores de material genético y los sectores que disfrutaban de la protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular respecto de los recursos genéticos agropecuarios. Tal polarización podría dificultar más el llegar a un acuerdo sobre estrategias comunes para conservar y gestionar de manera sostenible la diversidad biológica. Por consiguiente, el CCMA debía procurar una situación en la que los diferentes acuerdos internacionales se aplicaran de tal modo que se apoyaran mutuamente. El Acuerdo sobre los ADPIC debía aplicarse de manera compatible con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y viceversa. Del mismo modo, el examen del Acuerdo sobre los ADPIC de 1999 debía estudiar adecuadamente sus conexiones con los AMUMA.

51. El representante de Australia dijo que un aspecto importante del punto en examen era la relación entre los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades autóctonas y locales y el fomento de objetivos ambientales, en particular con arreglo al CDB. El punto de partida para analizar esta cuestión era comprender la manera en que podían utilizarse los sistemas vigentes de propiedad intelectual para proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades autóctonas y locales, y mediante ello ofrecer incentivos para la conservación de la diversidad biológica y fomentar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El Acuerdo sobre los ADPIC establecía criterios mínimos para la protección de los derechos de propiedad intelectual y dejaba a los Miembros de la OMC la facultad de adaptar y ampliar el sistema de propiedad intelectual. También permitía a los Miembros desarrollar formas suplementarias de protección de la propiedad intelectual para satisfacer los objetivos de política que figuraban en el párrafo j) del artículo 8 del CDB, de conformidad con su propio marco político nacional. Había que esforzarse por mejorar la comprensión práctica de las posibilidades que ofrecen los derechos de propiedad intelectual vigentes para aumentar los beneficios que pueden recibir las comunidades autóctonas y locales. Por consiguiente, Australia acogía con satisfacción el programa de la OMPI sobre los derechos de propiedad intelectual, que era una iniciativa práctica que Australia había apoyado, siendo incluso la sede de su primera misión investigadora. Este trabajo suministraría

una base para futuros debates sobre el posible papel de los derechos de propiedad intelectual en relación con los objetivos del CDB y los intereses de las comunidades autóctonas y locales. Si la cooperación internacional en esta esfera produjera resultados beneficiosos, el trabajo debería proseguir con una entera comprensión del sistema de la propiedad intelectual y de los principios incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, y con la especialización pertinente en propiedad intelectual.

52. El mejor uso y la mayor comprensión de las posibilidades del sistema vigente de propiedad intelectual ofrecían la posibilidad de alcanzar resultados compatibles con los objetivos del CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC. La cooperación internacional, a nivel práctico, debía incluir un examen de cada una de estas posibilidades. Australia esbozaba la siguiente lista de cuestiones a modo de ejemplo, señalando que no todas ellas serían pertinentes para todos los países: aspectos prácticos en materia de licencias y derecho contractual en relación con los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos propios o bajo custodia de las comunidades autóctonas y locales; utilización de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio (incluidas las marcas colectivas y de certificación) y las indicaciones geográficas para facilitar el reconocimiento del mercado y el comercio leal de mercancías relacionadas con las tradiciones autóctonas y locales; utilización similar de la legislación sobre competencia desleal y protección del consumidor; utilización de la legislación sobre confidencialidad e información no divulgada para proteger los conocimientos autóctonos y locales; utilización de los sistemas de información en materia de patentes para supervisar y evaluar los desarrollos tecnológicos que hacen uso de conocimientos tradicionales y de los recursos genéticos, y aplicación de los procedimientos legales vigentes para resolver los problemas relativos a la solicitud y concesión de patentes; administración colectiva de los derechos de autor, y estudio de la aplicación de los principios vigentes del derecho de autor a una gama más amplia de beneficiarios y materias; utilización de la protección de los dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, pequeñas patentes, y formas similares de protección, caso de estar disponibles, que puedan aplicarse a las innovaciones pertinentes y a dibujos originales que aprovechen culturas o conocimientos tradicionales; y reconocimiento de las obtenciones vegetales desarrolladas por comunidades autóctonas y locales.

53. Este tipo de trabajo de orientación práctica, que exploraba los beneficios del marco vigente en materia de propiedad intelectual, podía llevarse adelante inmediatamente, a niveles básicos, nacionales e internacionales, y ayudaría a fomentar un diálogo internacional bien informado. A nivel internacional, el CCMA debía reconocer los trabajos pertinentes que ya se estaban emprendiendo, como el de la OMPI, para establecer nuevos enfoques de los sistemas de propiedad intelectual para nuevos beneficiarios, como los poseedores autóctonos de conocimientos e innovaciones, teniendo en cuenta los intereses de sectores que hasta ahora sólo habían tenido un contacto escaso e insuficiente con el sistema de propiedad intelectual. Las comunidades autóctonas y locales podían recibir, entre otros beneficios, el de una mejor comprensión de la variedad de usos de los sistemas vigentes de propiedad intelectual por esas comunidades (así como por sus pequeñas o medianas empresas), y el estudio del uso de las normas vigentes para proteger diversos trabajos autóctonos. De tal trabajo podrían surgir las opciones para dar protección práctica a la diversidad biológica y a los conocimientos autóctonos. Había, por ejemplo, la posibilidad de capacitar a las comunidades autóctonas en la formulación de acuerdos sobre concesión de licencias a fin de negociar términos mutuamente aceptables para el uso de sus conocimientos o recursos genéticos. También podría impartirse formación en materia de principios de las patentes para ayudar a las comunidades a identificar sus propias tecnologías patentables y a considerar los efectos jurídicos de las solicitudes de patente derivadas de los actuales conocimientos autóctonos. Un caso reciente sobre los usos medicinales de la cúrcuma había mostrado cómo podían utilizarse los principios de las patentes para invalidar una patente en que se reivindicaban materiales ya reconocidos como conocimientos tradicionales y utilizados normalmente en la India.

54. La OMPI contemplaba la elaboración de una base de datos de conocimientos tradicionales y autóctonos que pudiera utilizarse para fomentar el reconocimiento, protección y compensación de los conocimientos de campesinos y comunidades tradicionales. Esa base de datos suministraría un

mecanismo práctico para proteger y documentar los conocimientos tradicionales, facilitando así las búsquedas sobre el estado de la técnica y demostrando fácilmente hasta qué punto la materia reivindicada era de conocimiento público. Esto simplificaría los procedimientos en relación con las patentes cuya validez se hubiera impugnado, como en el caso de la cúrcuma. Las indicaciones geográficas y las marcas colectivas y de certificación podían constituir instrumentos para la protección de tradiciones de ámbito regional. Australia estaba estudiando la utilización de marcas colectivas o de certificación. Una vez desarrollada y aplicada una interpretación más concreta de las posibilidades del sistema de propiedad intelectual, se alcanzarían mejores perspectivas acerca del posible modo de adaptación de los sistemas existentes, así como de las nuevas medidas necesarias para abordar materias que no se planteaban fácilmente en el sistema vigente. Un ejemplo era la labor de la OMPI sobre las nuevas formas de protección de las expresiones del folklore.

55. El representante de la India, en respuesta a las observaciones formuladas sobre el documento WT/CTE/W/82, dijo que, con respecto a la tecnología específicamente establecida de conformidad con un AMUMA, el mercado disponible para dicha tecnología sería múltiple en comparación con las patentes ordinarias. Lo cual era lógico. Sobre el comentario de los Estados Unidos de que la experiencia había demostrado que la transferencia de tecnología se daba en países con sólidos regímenes de patente, a la India le gustaría tener pruebas concretas de ello. Un régimen abierto de inversiones, por ejemplo, podría traducirse en tecnología que fuese transferida junto con el titular de los derechos bajo la forma de capital social e inversión. Respecto a la observación de los Estados Unidos de que ésa era una cuestión hipotética, la India había presentado un problema práctico experimentado al menos por tres países en relación con al menos una tecnología que se estaba suprimiendo en virtud de un AMUMA. Los futuros AMUMA podrían contener obligaciones similares. Para garantizar el apoyo mutuo de la conservación del medio ambiente y el régimen de la OMC debían analizarse tales cuestiones. La sugerencia del Japón de examinar las pruebas empíricas era también un camino positivo.

56. En relación con la observación formulada por los Estados Unidos sobre el documento WT/CTE/W/85, de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) no mencionaba el consentimiento fundamentado previo, la India dijo que, puesto que dicho Convenio establecía la obligación de compartir los beneficios, este documento sugería que dicho consentimiento era la forma de conseguirlo. La propuesta de Australia también era pertinente a este respecto. La idea era garantizar la compatibilidad mutua entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. La India reiteraba que no se habían realizado cambios sustantivos en el Acuerdo sobre los ADPIC antes de la conclusión del CDB. La India tenía dudas acerca de la observación formulada por las Comunidades Europeas de que se podría lograr el reconocimiento o la compensación por el uso de la diversidad biológica fuera del sistema de la propiedad intelectual. El CDB y la OMPI habían empezado a trabajar sobre las posibles soluciones en esta esfera. A menos que los titulares de derechos tuvieran la obligación de declarar la fuente de origen, la India preguntaba cómo conocerían las comunidades indígenas la forma en que se utilizaban sus conocimientos tradicionales, o cómo podrían participar en los beneficios. El CDB podría remitir sus sugerencias a la OMC sobre la compatibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB. El CCMA, por su parte, también debía comunicar sus propuestas al CDB.

57. El representante del Canadá recordó que la intervención de su delegación en la reunión de septiembre de 1997 se había centrado en el CDB, puesto que era el AMUMA que planteaba con más amplitud la interrelación entre los derechos de propiedad intelectual y la protección del medio ambiente. El Canadá había dicho que muchas de las posibles cuestiones referentes a la propiedad intelectual relacionadas con los objetivos del CDB podrían abordarse a través de los instrumentos y recursos vigentes del Acuerdo sobre los ADPIC, la OMPI y la legislación nacional. El Canadá había señalado también los asuntos siguientes: la complejidad de las cuestiones sobre los conocimientos autóctonos; el apoyo del Canadá al mecanismo del CDB para compartir el conocimiento de las experiencias nacionales; las experiencias canadienses con los conocimientos tradicionales en relación con los bosques; la identificación de cuestiones relacionadas con la diversidad biológica en la agricultura y la liberalización del comercio; la importancia de los derechos de propiedad intelectual y

las consideraciones referentes a los obstáculos técnicos al comercio y a las medidas sanitarias y fitosanitarias en la negociación del Protocolo sobre Bioseguridad; y la necesidad de reforzar el intercambio de información entre la Secretaría del CDB y la OMC. El Canadá acogía con satisfacción los acontecimientos recientes en esta esfera. La OMPI había comenzado un programa de investigación para estudiar la cuestión de los conocimientos autóctonos y locales, incluyendo los relativos a los recursos genéticos de las plantas.

58. La Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su cuarta reunión de mayo de 1998, había decidido establecer un grupo abierto de trabajo *ad hoc* sobre el párrafo j) del artículo 8, para ocuparse de las cuestiones sobre conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. Las observaciones formuladas por Australia y Colombia merecían una consideración más detenida. El Canadá había planteado la posible contradicción entre algunas propuestas del Protocolo sobre Bioseguridad y las disciplinas de la OMC en la reunión del Comité de MSF de junio de 1998. Éste era un ejemplo concreto de la necesidad de una buena coordinación de la política nacional para evitar eventuales conflictos entre la OMC y un AMUMA. En los debates de la FAO sobre el Entendimiento Internacional sobre los Recursos Genéticos de las Plantas, de junio de 1998, se había planteado la cuestión de los "derechos del agricultor", que podría tener consecuencias en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Si bien el Canadá deseaba reconocer la contribución de los agricultores y la necesidad de proteger, en consonancia con la legislación nacional y los acuerdos internacionales, su capacidad de mantener, usar, intercambiar, compartir y comercializar semillas y otras materias vegetales, ello no sentaba las bases para el reconocimiento de una forma internacional de derechos del agricultor.

59. El representante de Corea estaba de acuerdo en que el acceso a las tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia era esencial para la protección del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible. El Acuerdo sobre los ADPIC debía desempeñar un papel positivo facilitando el acceso y la transferencia, protegiendo a la vez los derechos de propiedad intelectual. Corea había tomado nota de las cuestiones planteadas respecto de la transferencia de tecnología que quedaba librada a la voluntad del titular de la patente, una vez que la tecnología de sustitución estuviera protegida mediante una patente después de la restricción de la tecnología original en función de un AMUMA. Corea apoyaba la propuesta del Japón de analizar casos concretos para dar al CCMA una comprensión más rica y centrar sus debates. Corea deseaba hacer una contribución a este respecto. Para garantizar la compatibilidad entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC, era necesario que las Secretarías de la OMC y del CDB intercambiaran información y estudiaran un mecanismo apropiado para ello, si bien teniendo presente el examen previsto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Corea acogía con satisfacción la decisión del CDB de establecer un grupo de trabajo *ad hoc* para estudiar la interrelación positiva entre la necesidad de protección de los conocimientos autóctonos y tradicionales y el Acuerdo sobre los ADPIC. La labor del CCMA sobre esta cuestión era necesaria en vista de los acontecimientos referentes al CDB.

60. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, reiteró el compromiso de la Asociación en la aplicación armoniosa del CDB y del Acuerdo sobre los ADPIC. En la sesión de información sobre los AMUMA, el CDB había señalado que las Partes del Convenio deseaban estudiar con el CCMA varios aspectos relativos a la relación entre ambos acuerdos, por ejemplo el acceso a los recursos genéticos. La ASEAN recordaba su declaración en la reunión del CCMA de junio de 1995, en la que había expuesto entre otras cosas que, aunque la OMC elaborara mayores disciplinas y un entorno más favorable para la realización y el desarrollo del comercio, también tenía la responsabilidad de contribuir al fomento del desarrollo sostenible. La ASEAN consideraba que el Acuerdo sobre los ADPIC contenía los requisitos previos necesarios para el desarrollo y la transferencia de tecnología, ocupándose a la vez del medio ambiente; la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC era primordial para el desarrollo sostenible. A pesar de ello, y en la preparación del examen de 1999 del Acuerdo sobre los ADPIC, el CCMA podría estudiar las cuestiones siguientes: i) la manera de interpretar con más precisión las definiciones científicas y prácticas de términos tales como "plantas", "animales", "microorganismos", "procedimientos biológicos", "obtenciones

vegetales" y un "sistema eficaz *sui generis*" en el contexto del párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC; ii) la aplicación del párrafo 2 del artículo 66 del mismo Acuerdo, que invitaba a los países desarrollados Miembros a ofrecer incentivos a las empresas e instituciones de su territorio destinados a fomentar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados; iii) una evaluación sobre si eran suficientes los incentivos económicos para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC; y iv) la compatibilidad de las disposiciones del CDB y de la OMC.

61. El representante de los Estados Unidos dijo que las aportaciones de los Miembros de estudios monográficos en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC y la transferencia de tecnología debían considerar también, en consonancia con el informe del CCMA de 1996, otros factores que tenían repercusiones en la transferencia de tecnología, como el entorno de las inversiones, los regímenes reglamentarios, etc. No tenía sentido plantear ejemplos que se centraran sólo en un aspecto de una cuestión multidimensional. Los Estados Unidos examinarían las sugerencias de la ASEAN para el trabajo futuro; algunas de las cuestiones planteadas eran tan técnicas que el Consejo de los ADPIC podría estar en mejor situación para abordarlas. El orador dijo que no sólo se habían hecho cambios importantes y sustantivos en el Acuerdo sobre los ADPIC después del Proyecto Dunkel, sino que algunos se habían efectuado a petición de la India, como en la cuestión acerca de si la solución de diferencias permitiría la posibilidad de reclamaciones sin infracción de disposiciones cuando tuvieran que ver directamente con el equilibrio de las obligaciones. Los Estados Unidos apoyaban la propuesta de remitir los documentos del CCMA al CDB, además de las actas de las reuniones en las que se había debatido sobre estos documentos, para ofrecer un cuadro completo de los debates.

62. El representante de la India respondió que la modificación del Acuerdo sobre los ADPIC en lo referente a las reclamaciones sin infracción era una cuestión horizontal derivada de que no se conocían cabalmente las consecuencias de los compromisos contraídos. Por consiguiente, convenía dejar fuera del debate el tema de las reclamaciones sin infracción. La opinión de la India era que no había habido ninguna modificación en el Acuerdo sobre los ADPIC posterior al Proyecto Dunkel en los aspectos sustantivos de la protección. Siempre que el CCMA remitiera información a los AMUMA que estuvieran debatiendo cuestiones similares, debía reflejarse en ella lo esencial de los debates, así como incluir los documentos pertinentes.

63. El Presidente dijo que estudiaría con la Secretaría la práctica actual del intercambio de información con el CDB a fin de atender las peticiones para mejorar la cooperación entre el CDB y la OMC sobre las cuestiones de interés mutuo.

64. El observador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dijo que el objetivo de la Organización era fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. La OMPI, como organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la protección de la propiedad intelectual, estaba preparada para ofrecer información técnica sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y con el medio ambiente. La OMPI estaba realizando durante 1998-99 un estudio sobre las cuestiones emergentes de propiedad intelectual relacionadas con el comercio y el medio ambiente, específicamente en su programa de trabajo sobre "Diversidad Biológica y Biotecnología", para estudiar el papel de la propiedad intelectual en la conservación, utilización y difusión de la diversidad biológica y la utilización de los derechos de propiedad intelectual en las transferencias de tecnologías ecológicamente racionales en el marco de los AMUMA. Los debates sobre los aspectos referentes a la propiedad intelectual de las invenciones biotecnológicas ofrecían un ejemplo de esta creciente conexión. Aunque la OMPI había abordado los derechos de propiedad intelectual en relación con las invenciones biotecnológicas como una cuestión principalmente relacionada con la transferencia de tecnología, los recientes debates indicaban un interés creciente en las posibles vinculaciones entre los aspectos de propiedad intelectual de la biotecnología, la conservación y el uso de la diversidad biológica y la participación en los beneficios que se derivaran de dicha utilización. El estudio de la OMPI incluirá los temas siguientes: constitución de un grupo de trabajo para estudiar los aspectos de propiedad intelectual de la

biotecnología y la aplicación del CDB; dos seminarios regionales sobre la aplicación de patentes a la biotecnología; participación en órganos internacionales pertinentes, entre ellos el CDB y el Protocolo sobre la Bioseguridad; proyectos de documentación *in situ* de los conocimientos tradicionales importantes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, en cooperación con el PNUMA; y un estudio sobre la repercusión de la propiedad intelectual en la transferencia de tecnología en el marco de los AMUMA.

65. El sistema de la propiedad intelectual estaba destinado a premiar la innovación y fomentar la transferencia de tecnología. La protección firme de la propiedad intelectual actuaba como incentivo para la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y aumentaba la transferencia de tecnología. Infundía confianza a los propietarios de tecnologías para invertir directamente en otros países a través de filiales de su propiedad exclusiva, empresas mixtas y acuerdos sobre concesión de licencias con otras empresas. En algunas ocasiones, la existencia de derechos de propiedad intelectual podría aumentar los precios y restringir la competencia. El saldo resultante de estas repercusiones sobre la transferencia de tecnología en el marco de los AMUMA diferiría de una rama de producción a otra, y de un país a otro. El estudio de la OMPI sobre la repercusión de los derechos de propiedad intelectual en los AMUMA tomará en consideración la transferencia de tecnología en el marco de nueve AMUMA pertinentes, abarcando diversas tecnologías y diferentes regiones y países. Las conclusiones y soluciones del estudio se dirigirán a garantizar que el sistema de la propiedad intelectual continúe apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. La OMPI invitaba a los gobiernos, representantes de la industria, organizaciones no gubernamentales y secretarías de AMUMA a que le comunicaran sus experiencias en este campo.

Otros puntos

Punto 3 b): La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

66. El representante del Canadá dijo que durante el Examen de las Políticas Comerciales de la India, en abril de 1998, el Canadá había formulado preguntas a este país sobre su programa de etiquetado ecológico Ecomarca de tipo I, mencionado en el párrafo 82 del informe de la Secretaría. La India no había respondido a las preguntas en ese momento, lo que era comprensible, habida cuenta de la necesidad de consultar a los funcionarios competentes de su Gobierno. El Canadá también había hecho referencia al estudio de la Ecomarca publicado por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) bajo el título *Trade Effects of Eco-Labeling*, reseñado en el documento WT/CTE/W/79 y debatido en la reunión del CCMA de marzo de 1998. El CCMA había recibido las experiencias nacionales del Canadá en materia forestal en el documento (WT/CTE/W/81-G/TBT/W/61); de Colombia sobre flores cortadas (WT/CTE/W/76-G/TBT/W/60); y las declaraciones del Brasil sobre etiquetas de productos de cuero y forestales. En 1998, los países en desarrollo Miembros habían reseñado sus experiencias en diseño, desarrollo y aplicación de etiquetas ecológicas, en contraste con lo ocurrido en 1996, cuando la mayor parte de las contribuciones las realizaron países desarrollados. Las respuestas de la India a las preguntas del Canadá ayudarían a una mejor comprensión de las preocupaciones de los países en desarrollo. El Canadá acogía en particular con agrado las observaciones de la India sobre la declaración, en el informe de la Secretaría del Examen de las Políticas Comerciales, en el sentido de que a juicio de las autoridades la Ecomarca aún no había tenido éxito. El Canadá agradecería también indicaciones sobre los criterios de procedimiento y producción aplicados en la elaboración de normas para determinados productos, y una reseña del procedimiento de aprobación y elaboración de los criterios aplicados por la Ecomarca de la India. Animaba asimismo a que otros países desarrollados y en desarrollo Miembros compartieran sus nuevas experiencias sobre etiquetado ecológico para lograr una mejor comprensión de los diversos enfoques utilizados.

67. El representante de la India dijo que era cierto que la Ecomarca india no había tenido éxito a pesar de existir desde hacía ocho años. La opción razonada del consumidor, que era la base de tales etiquetas ecológicas voluntarias, no había llevado a los consumidores a comprar productos con etiquetado ecológico. Hasta el momento sólo un producto había obtenido una Ecomarca, pero incluso ese producto ya no se vendía con la etiqueta ecológica porque los pobres, que eran el sector predominante de la sociedad india, tenían la sensación de que tal etiqueta incrementaba el precio del producto. La India facilitaría detalles sobre la elaboración de los criterios y sobre los criterios del procedimiento de aprobación. Esta información también podría obtenerse de la Oficina de Normas de la India, que participaba en el desarrollo de la Ecomarca. Esta Oficina era el servicio de información de la India en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de forma que también se les podían plantear preguntas por esta vía.

68. El representante del Canadá agradeció a la India su contestación. Aunque el Canadá entendía que pudieran obtenerse respuestas a través de la Oficina de Normas de la India, sería útil en el contexto del CCMA o en el seguimiento del Examen de las Políticas Comerciales de la India que dichas preguntas se respondieran por escrito.

69. El representante de la India manifestó que su delegación respondería a las preguntas del Canadá en la próxima reunión del CCMA, en la que se trataría el punto 3 b).

70. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, recordó la declaración de la ASEAN en la reunión de marzo de 1998 sobre la iniciativa de los Países Bajos de etiquetar todos los productos forestales. La ASEAN expresaba su preocupación porque no se trataba de un asunto indiferente desde el punto de vista comercial, y pedía a las Comunidades Europeas que actualizaran la información al CCMA a este respecto.

71. El representante del Canadá dijo su delegación compartía las inquietudes de la ASEAN y que también agradecería una información actualizada de las Comunidades Europeas sobre la iniciativa de los Países Bajos. El Canadá pensaba plantear esta cuestión en la reunión del Comité de OTC del mes de septiembre.

72. El representante de las Comunidades Europeas dijo que los Países Bajos habían enviado el texto del proyecto de Ley sobre etiquetado a la Comisión, que procedería a verificar su compatibilidad con las normas internas y efectuaría un dictamen a ese respecto lo más pronto posible. Las CE llamaban la atención de los Miembros acerca de la nota informativa sobre el sitio en la Web de las CE sobre etiquetado ecológico, que se había revisado, ampliado y actualizado en una nueva dirección: <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Sexto punto: El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

73. El Presidente señaló algunos acontecimientos recientes de interés en relación con el sexto punto. El Consejo del Comercio de Servicios se había reunido el 23 de julio de 1998, para abordar, entre otros temas, el sector de servicios relacionados con el medio ambiente como parte del intercambio de información sobre los sectores de servicios. La nota de antecedentes sobre los servicios relacionados con el medio ambiente (S/C/W/46), preparada por la División de Servicios para esa reunión, era útil en el contexto de los debates del CCMA, puesto que se basaba en el análisis sectorial de los beneficios para el medio ambiente de la liberalización de los servicios ambientales que figuraba en el documento WT/CTE/W/67/Add.1. Entre el 20 y el 22 de julio de 1998 la UNCTAD había mantenido una Reunión de expertos sobre el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para promover su sector de servicios ambientales; en la secretaría de la UNCTAD estaban disponibles copias del documento preparado para esa reunión. La secretaría de la UNCTAD había

suministrado copias de las conclusiones acordadas en dicha reunión y distribuiría el resumen del Presidente para información de los Miembros del CCMA bajo la signatura WT/CTE/W/96. Por último, la OCDE había publicado recientemente un estudio, *Improving the Environment Through Reducing Subsidies*, que recogía y sintetizaba el trabajo disponible de la OCDE sobre las medidas de apoyo y sus efectos sobre el medio ambiente.

74. El representante de las Comunidades Europeas dijo que las observaciones formuladas por su delegación en la reunión de marzo de 1998 sobre el documento de la Secretaría sobre los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio (WT/CTE/W/67) se habían distribuido sin restricciones en el documento WT/CTE/W/83.

75. La representante del Brasil dijo que su delegación había distribuido, bajo la signatura WT/CTE/W/93, un conjunto de principios sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible que la industria brasileña habría de observar en sus actividades. La importancia de estos principios procedía del hecho de que eran una iniciativa voluntaria de la Confederación Nacional de Industria del Brasil, que mostraba el grado de empeño de la industria brasileña respecto de las cuestiones ambientales y sociales.

Agricultura

76. El representante de Noruega recordó que, en la reunión de marzo de 1998, se invitó a los países que habían sugerido que la liberalización del comercio podría ocasionar efectos perjudiciales para el medio ambiente a aportar su experiencia nacional. Como Noruega estaba elaborando un documento sobre el sector agrícola para presentarlo en la reunión de octubre, el orador ofrecía algunas reflexiones preliminares sobre estas cuestiones. La eficacia distributiva y la maximización del bienestar debían ser cuestiones esenciales de la política económica y determinar la base del sistema multilateral de comercio. La liberalización del comercio no era un fin en sí misma, pero podría ser un medio para mejorar la eficacia y aumentar el bienestar. Sin embargo, los mecanismos basados en el mercado no podrían llevar a una distribución óptima de los recursos si los precios no reflejaban totalmente el coste y los beneficios del producto. El bienestar no podría aumentarse al máximo si no se tenían totalmente en cuenta las preferencias de la sociedad por los bienes públicos. En el ámbito del medio ambiente, tales bienes públicos incluían el paisaje agrícola, la diversidad biológica y la viabilidad de las zonas rurales.

77. Los costes externos y los beneficios de la producción agropecuaria se tenían en cuenta a través de los principios siguientes. El principio de "quien contamina paga" estaba relacionado con las externalidades negativas de la producción y tenía gran aceptación; establecía que los costes de una externalidad negativa (como la contaminación) debían ser soportados por quien la originaba, y reflejarse en última instancia en el precio del producto. El principio de "quien suministra cobra" se refería a las externalidades positivas de la producción y conforme a él los proveedores de bienes o servicios exigidos por la sociedad debían ser remunerados. Este principio estaba, pues, estrechamente relacionado con el suministro de bienes públicos, respecto a los cuales no existía procedimiento alguno. A través de la aplicación de estos dos principios podrían reconocerse y desarrollarse los beneficios resultantes de la agricultura y demandados por la sociedad, y reducirse al mínimo la repercusión perjudicial de este sector en el medio ambiente. La liberalización del comercio agrícola afectaba a la aplicación de estos principios de las siguientes maneras. La aplicación del principio "quien contamina paga" aumentaba los costes de producción agropecuaria en comparación con los países que no lo aplicaban. Por lo tanto, debía admitirse la compensación por esta desventaja. El principio de "quien suministra cobra" implicaba la compensación o el pago público a los proveedores de un bien público ambiental. Un grado de apoyo ajustado a la producción agrícola era la manera más eficaz de satisfacer la demanda de tales bienes públicos, en la medida en que eran productos conjuntos de la producción agrícola. Estas cuestiones se trataban detalladamente en el documento sobre preocupaciones no comerciales presentado por Noruega al Comité de Agricultura. En opinión de Noruega, la OMC debía permitir que los países aplicaran ambos principios para proteger el medio

ambiente y maximizar el bienestar. La liberalización del comercio tendría probablemente efectos ambientales adversos si, formalmente o en los hechos, restringía la aplicación de estos principios de política.

78. Noruega formuló observaciones sobre la opinión de algunos Miembros de que la liberalización del comercio agrícola sería en general beneficiosa para el medio ambiente, opinión basada en la hipótesis de que los problemas ambientales eran menos pronunciados en los países con niveles bajos de ayuda a la agricultura, en comparación con los países con niveles altos de ayuda. A este respecto, Noruega había comparado sus sectores agrícolas con determinados países de bajo nivel de ayuda y con el promedio de la OCDE. Teniendo en cuenta datos de la OCDE y de la FAO, Noruega tenía un consumo de plaguicidas por hectárea de tierra cultivable menor a la mitad del promedio de la OCDE, y de la quinta parte de los países seleccionados con bajo nivel de ayuda. El consumo de fertilizantes de Noruega estaba por debajo del promedio de la OCDE. La densidad del ganado, que podía ser un indicador indirecto útil de la contaminación del agua, parecía ser mucho más elevada en algunos países de nivel bajo de ayuda que en Noruega. Aunque estas cifras podían haber estado sujetas a algunas limitaciones metodológicas, no apoyaban la hipótesis de que un eventual traslado de la producción, desde países con nivel alto de ayuda, como Noruega, a países con bajo nivel de ayuda, daría como resultado una reducción global de la degradación del medio ambiente. Semejante cambio también podría tener una influencia negativa sobre la diversidad biológica tanto en los países en los que disminuía la actividad agrícola como en los que la tenían en aumento. La magnitud de los problemas ambientales agrícolas variaba en función de las condiciones naturales, los métodos de cultivo, la legislación nacional y la política aplicada. Noruega creía que no había una relación clara entre la degradación ambiental y el nivel de ayuda a la agricultura en los diferentes países.

79. El representante de la Argentina agradeció a Noruega su declaración y el documento distribuido en el Comité de Agricultura. La Argentina también había distribuido un documento en el Comité de Agricultura que se distribuiría igualmente en el CCMA bajo la signatura WT/CTE/W/97. Este documento se refería a las fallas de política y del mercado que no permitían que se reflejaran en los precios los costes completos de la producción. Si los precios se distorsionaban por medidas políticas, como las subvenciones que tenían efectos sobre la producción y las exportaciones, los precios internacionales se distorsionaban de tal forma que ni siquiera podían reflejar el coste privado marginal de producción. No era pues posible internalizar los costes ambientales de la producción mientras rigieran semejantes precios distorsionados. La Argentina no sostenía que el comercio libre garantizara la protección del medio ambiente, sino que si los precios no reflejaban el coste privado de producción debido a políticas distorsionadas, como las subvenciones, no era posible entonces reflejar los costes totales de la producción. Esto gravaba a los países en desarrollo, que no podían compensar las medidas nacionales aplicadas por los países desarrollados que, como las subvenciones, distorsionaban los precios. Era necesario eliminar las subvenciones como un primer paso para conseguir la corrección de los precios, es decir, para reflejar los costes privados de producción e internalizar entonces el coste total de producción. Este argumento se había repetido desde que se acordó en 1992 el Principio 16 de la Declaración de Río. Básicamente, no era posible partir de precios distorsionados.

80. El representante del Japón agradeció las observaciones formuladas por las Comunidades Europeas en el documento WT/CTE/W/83. El Japón también formularía observaciones más adelante. Su país compartía la opinión de las CE de que la liberalización del comercio podía necesitar el concurso de políticas ambientales y de gestión de recursos. La liberalización del comercio no debía emprenderse sin plantearse si se habían aplicado medidas ambientales adecuadas. El documento WT/CTE/W/67 habría sido más completo si hubiera planteado las externalidades ambientales positivas relacionadas con la agricultura. Debía prestarse más atención a este aspecto, y el Japón pensaba aportar su contribución en la próxima reunión sobre este asunto.

Servicios relacionados con el medio ambiente

81. El representante de los Estados Unidos dijo que la reunión de expertos sobre servicios relacionados con el medio ambiente de la UNCTAD, celebrada del 20 al 22 de julio, había reconocido la contribución positiva que una mayor liberalización del comercio en los servicios relacionados con el medio ambiente podría aportar a la protección del medio ambiente. También había reconocido que esa mayor liberalización del comercio podría contribuir a mejorar las condiciones de vida, particularmente para los sectores más pobres de la población. Esta reunión había animado a la OMC a proseguir la liberalización de los servicios relacionados con el medio ambiente en las próximas negociaciones del AGCS, sobre la base de que la liberalización en este sector podría ofrecer situaciones doblemente ganadoras. Se invitaba a los gobiernos a tomar medidas, incluida la protección de los derechos de propiedad intelectual, para mejorar su capacidad de absorber tecnologías ecológicamente racionales y adaptarlas a las condiciones locales. Los Estados Unidos consideraban que la reunión de la UNCTAD había sido útil, y recomendaban a los Miembros que tuvieran en cuenta sus documentos y conclusiones.

Silvicultura

82. El representante del Canadá dijo que habían resultado útiles las exposiciones efectuadas en la sesión de información sobre los AMUMA por parte de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y del Foro Intergubernamental sobre los Bosques (IFF), al demostrar las vinculaciones directas entre los procesos forestales internacionales y la labor de la OMC. La certificación, las normas y el etiquetado eran un campo en el que ambas organizaciones acogerían con agrado la contribución de los órganos competentes de la OMC. El documento del Canadá sobre su experiencia en el sector de la silvicultura (WT/CTE/W/81-G/TBT/W/61) daba una amplia referencia del Grupo Intergubernamental Especial sobre los Bosques a este respecto. Este documento sería distribuido también en la reunión del IFF de agosto en Ginebra, para contribuir a una mejor comprensión de las cuestiones y consideraciones que interesaban a la vez en los foros sobre comercio y sobre la silvicultura. El Canadá compartía la opinión expresada por la ITTO y el IFF de que los sistemas de normas, certificación y etiquetado no debían hacer discriminaciones entre la madera tropical, y sus productos, y los climas templados; se trataba de una cuestión en la que existía un interés común de los países productores, tanto desarrollados como en desarrollo, de contribuir a un debate fundamentado y equilibrado. Como existía una posibilidad de discriminación del comercio, los Miembros de la OMC tenían sin duda una función en cuanto a definir o fortalecer las disciplinas vigentes, para que las normas, la certificación y los criterios de etiquetado fomentaran los objetivos de ordenación forestal sostenible, manteniendo al mismo tiempo la neutralidad en sus efectos comerciales. También era necesario que los gobiernos ofrecieran orientación política sobre estas cuestiones, tanto en los foros comerciales como en los forestales.

83. Como demostraba el documento del Canadá, cuya experiencia era similar a la de Colombia respecto de las flores cortadas, las cuestiones en juego eran más amplias que el anterior debate del etiquetado ecológico de marca única del tipo I. Debían ampliarse de igual manera los debates del CCMA, y el Canadá consideraba que sería útil invitar al Foro Intergubernamental sobre los Bosques para que informara al Comité, oralmente o por escrito, sobre sus debates acerca de estas cuestiones en la próxima reunión del CCMA. El Canadá observaba con interés la referencia de las Comunidades Europeas, en la sesión de información sobre los AMUMA, al hecho de que el acceso a su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para los productos forestales estaba condicionado a la adhesión a la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. El Canadá acogería con agrado la aclaración de si esta condicionalidad era respecto al acceso al SGP en sí, o era una adición al SGP; vería con satisfacción que estas cuestiones se analizaran más detenidamente en el CCMA o en el Comité de OTC.

84. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, dijo que su delegación agradecería también la aclaración de las CE respecto a su Sistema Generalizado de Preferencias para los productos forestales.

85. El representante de las Comunidades Europeas dijo que su SGP no contenía un elemento de condicionalidad. Había un elemento adicional, según el cual los productos de bosques gestionados de forma sostenible podrían gozar de mayores preferencias en el marco del SGP.

86. Se acordó invitar al Foro Intergubernamental sobre los Bosques a la reunión del CCMA que tendría lugar entre el 26 y el 28 de octubre para informar a los Miembros sobre los debates en dicho Foro.

Punto noveno: El programa de trabajo previsto en la Decisión sobre el comercio de servicios y el medio ambiente

87. El representante del Japón hizo una declaración preliminar en relación con este punto. El orador acogía con agrado el documento que se había preparado para el Consejo del Comercio de Servicios sobre los servicios relacionados con el medio ambiente (S/C/46) y pedía a los Miembros que lo examinaran en el contexto de la labor del CCMA sobre la relación entre los servicios y el medio ambiente. Se trataba de un sector en el que la liberalización conduciría a mejorar la protección del medio ambiente y la calidad de vida. Como el Japón había manifestado en el Consejo del Comercio de Servicios, debía fomentarse una mayor liberalización de los servicios relacionados con el medio ambiente. Podría emprenderse un análisis acerca de varias cuestiones, por ejemplo si los proveedores extranjeros en este sector encontraban obstáculos en el comercio de servicios, y respecto a la contratación pública. El CCMA también podría estudiar en el marco del punto noveno sectores de servicios específicos, como los servicios financieros y de transporte.

88. El Presidente dijo que, a la luz de los debates, los Miembros del CCMA tal vez desearan consultar el documento S/C/46, y sugirió que hubiera ejemplares disponibles en la reunión del CCMA de octubre.

Otros asuntos

89. El representante de las Comunidades Europeas informó al CCMA de que su delegación había presentado al Consejo General de la OMC, en su reunión de los días 15 y 16 de julio de 1998, una comunicación acerca de una reunión de alto nivel sobre comercio y medio ambiente. Esta comunicación (WT/L/273) representaba la continuación de la propuesta de las CE en la reunión del CCMA celebrada los días 19 y 20 de marzo, en la que habían sugerido que el fortalecimiento del diálogo entre las autoridades de más alto nivel en materia de comercio y de medio ambiente impulsaría el proceso encaminado a hacer que las deliberaciones del CCMA facilitasen decisiones más generales de la OMC. Desde entonces, la idea de las CE había ganado un apoyo creciente. La comunicación de las CE fue redactada en parte como respuesta a las peticiones de que expusiera sus ideas más detalladamente. Su delegación esperaba que el Consejo General debatiera esta comunicación después de la suspensión de actividades del verano.

90. El CCMA expresó su agradecimiento por la contribución del Sr. Andrew Griffith (Canadá) y del Sr. Gary Sampson (Secretaría de la OMC) en los trabajos sobre comercio y medio ambiente.
